

82ª REUNION — 19ª SESION EXTRAORDINARIA — ENERO 9 DE 1959

Presidencia de los señores diputados Federico F. Monjardín, Jorge Raúl Decavi
y Juan Raúl López

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretario: doctor Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ABAROA, Rufino Vicente
ALZABÉ, Pedro Bernabé
AQUINO, Porfirio Antonio
ARITO, Juan
ARMENDARIZ, Alejandro
BAUDUCCO, Enrique
BECERRA, Carlos Alberto
BEIRO, Angel Francisco
BELNICOFF, Manuel
BENEVENTANO, Domingo
BERNASCONI, Mario
BERTONE, Marcos R.
BLANCO, Rubén Víctor M.
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BONFACIO, Juan José
BREYTER, Isaac
BRUZZO IRAOLA, Juan P.
BULÍ GON, Enrique A.
BURDEOS, José Antonio
BUSTOS, Jerónimo L.
CAGGIANO, Angel R.
CAMET, Carlos Ernesto
CANEPÁ, Sebastián Oreste
CARRERA, Rodolfo Ricardo
CARRETONI, Jorge C.
CASAS, José B.
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTIN, Carlos R.
CORREA, Carlos María
CORTÉS, Ezequiel
CUEVAZ, Agustín
CHAVERO, Luciano
DAMIANI, Salvador
DECÁVI, Jorge Raúl
DE LA VEGA, Juan Carlos
DESPOUX, Pablo Pedro
DÍAZ, Rosario Domingo
DOMINGORENA, Horacio Osvaldo
DOURS, Roberto José
ERREA, Daniel
ESCALADA, Alfredo H.
FASCE, Antonio
FAYA, Luis
FEIGUIN de FERRARI, Berta
FERNÁNDEZ, José Manuel

FERRARIS, Jorge Domingo
FERREIRA, Jorge W.
FOSSATI, Evers Nelson
FREGA, José
FUERTES, A. Ricardo
GALLO, Luis M.
GARCÍA, Ernesto
GARCÍA FLORES, José I.
GARCÍA VEIGA, Ignacio
GARONA, Alberto Agustín
GIANSEIRA, Marino Alejandro
GILI, Miguel
GIORDANO ECHEGOYEN, Mario
GOLDSTRAJ, Zenón
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZÁLEZ, Ricardo A.
GOROSPE, Valentín
GRANDI de MARTÍN, Palmira A.
GUTIÉRREZ, José María
GUTIÉRREZ, Victorino H. B.
GYSELS, Néstor Juan
HEREDIA, Bernardo M.
HEREDIA, Gilberto L.
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Rafael
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.
JUAREZ PENALVA, Miguel Angel
JUNÍN, Simón
JURI, Jorge
KRONHAUS, Arnoldo
LAFUENTE, Ambrosio César
LAFUENTE, Augusto Antonio
LAGOS, César M.
LEÓN, Luis Agustín
LICEAGA, José V.
LICEAGA, María Teresa M. de
LISCHETTI, Carlos A. M.
LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo
LÓPEZ, Juan Raúl
LÓPEZ BALLESTEROS, Horacio María
LÓPEZ SANSON, Ernesto
LÓPEZ SERROT, Oscar
LUELMO, Horacio Flavio
LLUGDAR, Elías N.
MALUF, Emilio
MANES, Juan Carlos
MANUBENS CALVET, Reginaldo
MARCONATO, Pedro Luis
MARCHINI, Atilio Enrique O.

MARINI, Anselmo A.
MARTIRANI, Luis
MÁS, Juan Antonio
MERCADO, Valentín A.
MIGLIARO, Victorio M.
MONJARDÍN, Federico F.
MONTE, Ricardo Alvaro
MOSCA, Gabriel Carlos J.
NASSIF NEME, Carim
OREJA, Pablo Fermín
PAEZ, Nieves Humberto
PANELO, Ricardo E.
PARENTE, Miguel A.
PARODI GRIMAU, Misael J.
PARRY, Enrique
PAVIOLO, Ricardo J.
PENNACCHI, Alfredo Arquímedes D.
PERALTA, Domingo Orlando A.
PERETTE, Carlos H.
PERKINS, Jorge Walter
PITTO, Luis María
POITEVIN, E. Emilio
POLOGNA, Aurelio José
PONCE DE LEÓN, Martín A.
POSSE, Melchor S.
PRECE, Angel Oscar
PURICELLI, Valdemar
RAVETTI, Francisco Antonio
RECIO, José A.
RODRÍGUEZ ARAYA, Agustín
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ DÍAZ, Rogelio S.
SAGO, Fayiz
SALIM, Abraham
SALOMONE, Humberto
SANTAGADA, Nélido E.
SANTONI, Nabucodonosor
SAYAGO VALDEZ, Miguel Angel
SCHWEIZER, Bernardo
SEGOVIA, Carlos A.
SILVEIRA MARQUEZ, Carlos
SIRENA, Antonio C. P.
SOLANAS, Juan Carlos
SOLARI, Juan Alberto
SPANGENBERG, Enrique
STORANI, Conrad Hugo
SUAREZ, Facundo Roberto
SUJEROS, Pedro Ignacio P.

TARULLI, Pascual
TECCO, Luis Alberto
TELLO ROSAS, Cándido
TESSIO, Aldo E.
TONELLI, Haroldo Juan
TORTONESE, Dante Oscar
TORTORA, Antonio
TROILO, Eleogardo B.
URCELAY, Rafael Cándido
UZAL, Francisco Hipólito
VALLE, Salvador
VECCHIETTI, Augusto Néstor
VINCIGUERRA, Rómulo
ZARRIELLO, Raúl Jorge
ZUBIAURRE, Alberto

AUSENTES, CON LICENCIA:

ALDERETE, Elío
ARAMBURU, Julio P.
AYBAR, José Antonio
BAIGORRIA, Néilda Rosa T.
BARRIO, Luis
BONET CONVALIA, Salvador
CASELLA PINERO, Juan M.
CONTTE (h.), Adolfo
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.
MANTECÓN, Esteban
MORENO, Eufemio Teclo
MUSACCHIO, Vicente M.
PITTALUGA, José Saturnino
POZZIO, Antulio F.

RIVERO, Jorge I.
ROSENKRANTZ, Eduardo S.
RUIZ, Lucio Carlos
VILLAR, Alfredo
ZANNI, Enrique Mario

AUSENTES, SIN AVISO:

BECERRA, Olegario Antonio
CALABRESE, Pablo
CÁRDENAS, Juan Carlos
CASTILLO, Hugo Enrique
CIALZETA, Domingo
CUARETTA, César Ramón
GALEANO, Roberto A.
VERDAGUER, Armando Miguel

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 7097.)
- 2.—Manifestaciones respecto de la formación del quórum en la Honorable Cámara. (Página 7098.)
- 3.—Asuntos en trámite:
 - I.—Comunicaciones del Honorable Senado. (Página 7098.)
 - II.—Comunicaciones oficiales. (Página 7098.)
 - III.—Peticiónes particulares. (Página 7098.)
 - IV.—Proyecto de ley del señor diputado Aba-
roa: edificio para el hospital de la ciudad
de Villa Nueva, provincia de Córdoba.
(Página 7099.)
 - V.—Proyecto de ley del señor diputado Mar-
conato, por el que se declara monumento
nacional la casa donde nació Guillermo
Enrique Hudson. (Página 7099.)
 - VI.—Proyecto de ley del señor diputado Mar-
conato: subsidio a la Biblioteca Popular
Belgrano, de San Antonio de Areco, pro-
vincia de Buenos Aires. (Página 7100.)
 - VII.—Proyecto de ley del señor diputado Mon-
jardín, sobre administración de la Im-
prenta del Congreso. (Página 7100.)
 - VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Ta-
rulli: edificio para la Escuela Nacional 128
de la localidad de Vipos, provincia de
Tucumán. (Página 7101.)
 - IX.—Proyecto de ley del señor diputado Ta-
rulli: instalación de servicio de cloacas en
la ciudad de Aguilares, provincia de Tu-
cumán. (Página 7102.)
 - X.—Proyecto de ley del señor diputado Ta-
rulli: construcción de una alcantarilla en
la línea ferroviaria del ramal Pacará-Ter-
mas de Río Hondo, del Ferrocarril Ge-
neral Belgrano. (Página 7102.)
 - XI.—Proyecto de ley del señor diputado Uzal,
por el que se modifican disposiciones le-
gales sobre fomento a la cinematografía
argentina. (Página 7102.)
 - XII.—Proyecto de declaración del señor dipu-
tado Hernández Ramírez por el que se
expresa el repudio a expresiones atri-
buidas a un miembro de la Academia de

Ciencias de la Unión Soviética. (Página
7102.)

- XIII.—Proyecto de declaración del señor diputa-
do Perette y otros; consideración del
Plan de Estabilización Económica. (Pági-
na 7103.)
- XIV.—Proyecto de resolución del señor diputado
Bertone sobre merma de las ventas de ta-
nino en el exterior y paralización de
plantas industriales productoras de esa
materia prima. (Página 7103.)
- XV.—Proyecto de declaración de los señores
diputados Despouy y Arlto sobre ayuda
financiera a la provincia de San Luis.
(Página 7104.)
- XVI.—Proyecto de resolución del señor diputado
Perette y otros: designación de una co-
misión para preparar una publicación de
las obras y el pensamiento de Juan B.
Justo y de Lisandro de la Torre. (Página
7104.)
- 4.—Licencias para faltar a sesiones. (Página 7104.)
- 5.—Inserción en el Diario de Sesiones. (Página 7105.)
- 6.—Indicación del señor diputado Rodríguez Araya
de que se invite a ministros del Poder Ejecutivo
a concurrir a las deliberaciones de la Honorable
Cámara. (Página 7105.)
- 7.—Homenaje a la memoria de los caídos en el
movimiento revolucionario del 29 de diciembre
de 1933 en Santa Fe, y del general Conrado
Risso Patrón. (Página 7105.)
- 8.—Fijación del orden de la labor de la Honorable
Cámara. (Página 7107.)
- 9.—Moción del señor diputado Hernández Ramírez,
de preferencia para el proyecto de declaración
por el que se repudian declaraciones atribuidas
a un miembro de la Academia de Ciencias de
la Unión Soviética. (Página 7111.)
- 10.—Consideración del despacho de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Comercio, en
el proyecto de ley sobre modificación de la le-
gislación aduanera. Se sanciona. (Página 7114.)
- 11.—Consideración del despacho de la comisión de
Transportes en el proyecto por el que se resuel-
ve constituir una comisión bicameral para el
estudio de medidas tendientes a enjugar el dé-
ficit de explotación de los ferrocarriles del Es-
tado. Se sanciona. (Página 7153.)

- 12.—**Moción del señor diputado Prece** de que la Honorable Cámara se constituya en comisión para estudiar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley sobre reformas al régimen impositivo. (Página 7154.)
- 13.—La Honorable Cámara, constituida en comisión, estudia las modificaciones del Honorable Senado en el proyecto de ley a que se refiere el número 12 de este sumario. (Página 7154.)
- 14.—**Consideración del despacho de la Honorable Cámara**, constituida en comisión, en el proyecto de ley, en revisión, a que se refieren los números 12 y 13 de este sumario. Se sanciona. (Página 7160.)
- 15.—Continúa la **consideración del despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda** en el proyecto de ley sobre aplicación del escalafón para el personal civil de la administración pública. Se sanciona. (Página 7161.)
- 16.—**Apéndice:**

Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 7194.)

—En Buenos Aires, a los nueve días del mes de enero de 1959, a las 18 y 30:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. López Ballesteros. — Hago indicación de que se continúe llamando durante media hora más, a fin de lograr quórum.

Sr. Rodríguez Araya. — ¿Qué número hay en la casa?

Sr. Presidente (Monjardín). — En la casa hay 100 señores diputados.

Sr. Rodríguez Araya. — ¿Está reunido el bloque de la mayoría?

Sr. Presidente (Monjardín). — Tengo entendido que estaba reunido hasta hace unos minutos.

Sr. Rodríguez Araya. — Entonces, que se siga llamando durante media hora más.

Sr. Presidente (Monjardín). — Habiendo asentimiento, se continuará llamando durante media hora.

—Se continúa llamando.

—A la hora 19 y 20:

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Tessio. — Señor presidente: ha vencido la media hora reglamentaria y además otra media hora durante la cual se ha seguido llamando con asentimiento de los diputados presentes en el recinto. Hasta este momento no hay quórum. Hago moción de orden de que se levante la sesión.

Sr. Solanas. — ¿Cómo sabe el señor diputado que no hay quórum en el recinto?

Sr. Tessio. — Lo reglamentario, señor presidente, es que se vote mi moción.

Sr. Solanas. — Que se pase lista. No se puede saber si hay quórum, si no se verifica previamente.

Sr. Tessio. — Si no se puede votar mi moción, debe levantarse la sesión.

Sr. Solanas. — Yo sostengo que hay quórum, señor presidente. Que se pase lista.

Sr. Tessio. — Corresponde que se vote mi moción de orden.

Sr. Solanas. — No se puede resolver sin determinar si hay quórum o si estamos en minoría. Para eso hay que pasar lista.

Sr. Tessio. — Conforme al reglamento corresponde que se levante la sesión.

Sr. Solanas. — ¿En qué se funda el señor diputado por Santa Fe para afirmar que no hay quórum en este momento? Yo sostengo que hay suficiente número de diputados en el recinto, según mi apreciación personal, contra lo que sostiene el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Juárez Peñalva. — Para saber si hay quórum, señor presidente, previamente debe pasarse lista. Si no se pasa lista, no puede saberse si la Cámara tiene número para sesionar.

Sr. Solanas. — Es menester que se pase lista, y si se comprueba que no hay quórum, entonces que se levante la sesión.

Sr. Presidente (Monjardín). — Señores diputados: hay dos soluciones reglamentarias. Una de ellas —que se viene practicando reiteradamente en estas sesiones— consiste en votar de inmediato la moción de orden y, si no hay número, levantar la sesión. La otra es la que deriva de una disposición reglamentaria que establece el derecho y la obligación de pasar lista para verificar quiénes son los señores diputados ausentes, a los efectos reglamentarios.

Ahora varios señores diputados han pedido que se pase lista; y de acuerdo con los antecedentes cumplidos en este período con el asentimiento de la Cámara, la Presidencia hará que por Secretaría se pase lista.

Sr. Solanas. — Entiendo, señor presidente, que no puede votarse la moción de levantar la sesión sin establecerse antes si hay quórum.

A mi entender no hay dos soluciones, como manifiesta el señor presidente. La solución es una sola: establecer previamente si hay quórum.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a pasar lista.

—Se pasa lista.

—Diputados presentes: Abaroa, Alzabé, Aquino, Arito, Beneventano, Bertone, Boffi, Bogliano, Bonifacio, Breyter, Bruzzo Iraola, Bulit Goñi, Bustos, Caggiano, Cánepa, Carrera, Carrettoni, Condoluci, Correa, Cortés, Cuevaz, Chavero, Decavi, de la Vega, Despouy, Domingorena, Dours, Errea, Escalada, Fasce, Feiguín de Ferrari, Fernán-

—Se aprueban las modificaciones de los puntos 2º a 15.

Sr. Presidente (Decavi). — Quedan aceptadas las modificaciones del Honorable Senado, y definitivamente sancionado el proyecto de ley (1).

15

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Sr. Presidente (Decavi). — Corresponde pasar al punto 4º de la orden del día, relacionado con el proyecto de ley sobre Escalafón para el Personal Civil de la Nación.

Continúa la consideración en particular del proyecto de ley (2).

Sr. Prece. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Antes de continuar con la discusión en particular del proyecto relacionado con el Escalafón para el Personal Civil de la Nación, voy a proponer que se reconsidere el artículo 11, a fin de poder plantear una cuestión de forma y redacción.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar la moción de reconsideración que formula el señor diputado por Santa Fe.

—Resulta afirmativa de 92 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Voy a proponer modificaciones de forma en la redacción de este artículo que no varían en absoluto su sentido y su significado.

Propongo agregar después de la palabra «Substitúyese» la siguiente: «a partir del 1º de noviembre de 1958». Se desea con esta modificación que este artículo juegue juntamente con el ejercicio, o sea, del 1º de noviembre al 31 de octubre.

En la parte final relativa al texto del artículo 33, donde dice «A esos efectos» debe decir «A los efectos de lo dispuesto en este artículo». En la forma como está redactado, con las palabras «A esos efectos», parecería que se relacionaran exclusivamente con el párrafo anterior, cuando en realidad lo que quiere significarse es que estas normas estén vinculadas a la totalidad del artículo. La modificación propuesta cumple esa finalidad.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 7201.

(2) Véase el texto del proyecto de ley en la página 6867 del Diario de Sesiones, correspondiente a la sesión del día 22 de diciembre de 1958.

Sr. Presidente (Decavi). — Se dará cuenta por Secretaría de la forma como quedaría el texto del artículo.

Sr. Secretario (Oliver). — La primera parte del artículo 11 quedaría así: «Substitúyese a partir del 1º de noviembre de 1958», y seguiría el texto como está. En cuanto al artículo 33, substituído por el despacho, en la parte final donde dice «a esos efectos» etcétera, quedaría: «a los efectos de lo dispuesto por este artículo», y seguiría el texto como está.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 91 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 13 propuesto por el señor diputado por Santa Fe como agregado al texto del proyecto.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — En la sesión del 23 de diciembre, cuando se presentó a esta Honorable Cámara este artículo, se hizo un debate en general y se dieron los fundamentos por los cuales se presentaba. Eso me exime ahora de entrar en mayores consideraciones sobre el sentido del mismo.

No obstante queremos dar un poco más de claridad en la interpretación del artículo proyectado, de tal manera que las facultades que se otorgan al Poder Ejecutivo para racionalizar la administración pública de acuerdo a las condiciones financieras del país, estén especificadas en las normas de este artículo, para lo cual debo, en nombre de la comisión proponer uno nuevo que, siguiendo los lineamientos del anterior, interprete más cabalmente el sentido de las normas que han de darse al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Decavi). — En consecuencia, el señor diputado retira la redacción original del artículo 13.

Sr. Prece. — Sí, señor presidente, y presento en su lugar un nuevo texto.

Sr. Presidente (Decavi). — Por Secretaría se va a dar lectura del artículo 13, en su texto nuevo, a que acaba de referirse el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Secretario (Oliver). — Es el siguiente:

Artículo 13. — Autorízase al Poder Ejecutivo para que, frente a la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, reduzca funciones o empleos de la administración pública nacional (administración central, servicios de cuentas especiales, organismos descentralizados, empresas del Estado, obras sociales y plan de trabajos públicos), en la medida que estime compatible con el adecuado funcionamiento de los servicios.

Dicha reducción se operará mediante la aplicación de los siguientes procedimientos:

a) Limitación de servicios del personal que sea titular de una jubilación ordinaria o prestación similar;

b) Prescindir de los servicios de quienes reúnan los extremos necesarios para acogerse a la jubilación

ordinaria, quedando autorizados los organismos previsionales respectivos para abonarles —con carácter de anticipo y hasta tanto se determine el haber jubilatorio respectivo—, el 80 por ciento del probable monto de pasividad. Dicho anticipo comenzará a abonarse dentro de los sesenta días del cese del agente;

c) Aplicación de un régimen que reduzca al mínimo la acumulación de cargos, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo modificará los regímenes en vigor;

d) Prescindir de personal en la medida que sea necesario, y de acuerdo con un sistema que ampare a los agentes de más capacidad, ponderado mediante un régimen uniforme de calificaciones, y a igualdad de esa condición, a aquellos con mayores obligaciones familiares.

Los agentes que cesen en virtud de las disposiciones de este artículo tendrán derecho a una indemnización, que será graduada por el Poder Ejecutivo según las distintas condiciones del personal, enumeradas precedentemente, y la antigüedad en el servicio. Dicha indemnización, que no podrá ser inferior a tres meses de sueldo, se abonará en cuotas mensuales.

Las vacantes producidas serán eliminadas automáticamente de los presupuestos, y el importe de las mismas se destinará al pago de las indemnizaciones precedentemente establecidas.

Cuando mediaren razones de interés nacional, o impostergables necesidades del servicio, el Poder Ejecutivo podrá disponer excepciones a lo previsto en los puntos a) y b).

Las normas del presente artículo tendrán aplicación hasta el 31 de octubre de 1960, quedando en suspenso durante dicho lapso cualquier disposición legal que se le oponga.

Sr. Rodríguez Araya. — Pido que se lea el agregado que he propuesto para ese mismo artículo.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a dar lectura del agregado propuesto por el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Secretario (Oliver). — El señor diputado por Santa Fe propone como agregado, al final del artículo, lo siguiente:

Como medida de emergencia, quedarán: 1) reducidas las dietas de los legisladores a diez mil pesos moneda nacional. No podrán asignarse viáticos de ninguna especie; 2) concluidas las funciones, sin derecho a indemnización, de los miembros de las fuerzas armadas, en retiro, que desempeñen puestos públicos; 3) concluidas las funciones de los jubilados que perciban el 82 por ciento en sus haberes, sin derecho a indemnización, que desempeñen empleos públicos; 4) reducidos los aguinaldos anuales a una suma máxima de seis mil pesos.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Heredia (B.M.). — Señor presidente: es indudable que el país está atravesando por una situación realmente dramática. En honor a la verdad, debemos manifestar que ella no es producto de la orientación y política de nuestro gobierno, sino de la herencia que hemos recibido de administraciones anteriores, que no han sabido solucionar las necesidades de nuestro pueblo.

También es indudable que, desgraciadamente, los sectores laborales del país —la clase menos pudiente: la trabajadora— siempre, como lo demuestra la historia, es la que sufre las consecuencias de una situación que no contribuyó a crear. Los sectores laborales nunca tuvieron la responsabilidad ni ejercieron la dirección del gobierno. Pero, cuando ocurren hechos de esta naturaleza, siempre el hilo se corta por lo más delgado. El modesto hombre de trabajo, el que crea el progreso y el adelanto del país, es el que soporta las consecuencias de las medidas económicas que es necesario aplicar.

Hablo a título personal, porque mi pensamiento, posiblemente, no represente el de la mayoría de mis compañeros de sector. Esto no significa un alzamiento contra la dirección del sector de la mayoría, al cual pertenezco. En las organizaciones obreras, hasta antes de ostentar el honroso cargo de diputado de la Nación, he estado en mi sindicato luchando contra todas estas cosas. No puedo pasar por alto estas reflexiones que ahora manifiesto y que sostuve reiteradamente siendo dirigente sindical. Mi honestidad, sinceridad y lealtad hacia los compañeros de lucha y de trabajo me obligan a exteriorizarlas.

Sé que, desgraciadamente, habrá que adoptar medidas un poco drásticas, que afectarán las necesidades de los trabajadores, quienes, en definitiva, sufrirán las consecuencias. Pero, entiendo que no deben ser solamente ellos quienes las soporten. Por eso, con un poco de emoción, y asumiendo la correspondiente responsabilidad, sostengo que es necesario que, en alguna oportunidad, hagamos recaer la solución de estos problemas en otros sectores sociales del país.

La situación económica en que la Nación se encuentra no debe ser atribuida a la clase trabajadora. La burocracia no consiste solamente en la gran cantidad de obreros y empleados de la administración nacional. Muchas veces ella se exterioriza desde arriba. Posiblemente en la historia política del país no se dé el caso de ningún partido político que en función de gobierno haya designado tan pocos empleados públicos. Esto lo saben los señores diputados de la minoría. Tanto en el orden nacional, provincial como municipal, la Unión Cívica Radical Intransigente, en ocho meses de gobierno, es el partido que menos empleados públicos designó. Eso nos ha traído —y perdónese me la franqueza— problemas de carácter interno, porque con relación a la política de comité queremos realizar la que contribuya a la solución de problemas de orden general. Preferimos el enfrentamiento de nuestros correligionarios en el comité con el propósito de salvar al país.

Alguna vez debía encararse una política un poco en serio —a lo que desgraciadamente no estamos acostumbrados, debido a los largos años de demagogia que ha soportado el país.

Creo que es necesario que el artículo 13 sea modificado. Con todo el respeto que me merecen las fuerzas armadas, debo decir que muchas veces han abandonado el cuartel para ir hacia la administración pública y para participar en la actividad política del país. No niego ese derecho a sus integrantes, en su calidad de ciudadanos. Pero entiendo que uno de los puntos del artículo 13 que posiblemente llegue a hacerse famoso en el país, debe establecer en forma expresa la incompatibilidad tanto de civiles como de militares, en actividad o en retiro, para ejercer dos cargos. Como dije anteriormente, la responsabilidad de las soluciones no debe recaer únicamente sobre los hombres de trabajo, sino sobre todas las actividades sociales.

Nosotros debemos dar el ejemplo, como lo hemos dado en la austeridad republicana de nuestro partido en función de gobierno. Por ello voy a solicitar que la comisión correspondiente acepte incluir un punto que establezca expresamente la incompatibilidad de militares y civiles, ya sea en actividad o retiro, para ejercer dos cargos, para cobrar dos sueldos; la jubilación automática para la gente en edad de jubilarse; la incompatibilidad del jubilado para ejercer también dos cargos.

Luego trataremos de desplazar hacia la actividad civil al hombre que puede estar de más, para que tengan la seguridad los trabajadores argentinos que el gobierno actual no intenta incrementar las cesantías en masa. Somos sensibles al sentimiento popular. Desgraciadamente debemos tomar este tipo de medidas, no porque queramos, no porque estemos entregados a intereses ajenos a la nacionalidad, no porque nuestro tipo de política esté entregado a romper con el pueblo argentino, sino porque la necesidad nos obliga. Por lo menos demostremos al hombre de trabajo argentino que en esta oportunidad las soluciones no van de abajo para arriba, sino que vienen de arriba para abajo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — ¿Acepta la comisión las proposiciones de los señores diputados Heredia y Rodríguez Araya?

Sr. Prece. — La redacción del artículo interpreta ampliamente las aspiraciones vertidas por el señor diputado Heredia. Lo que él expresó a través del orden de prioridades, en la manera en que la administración pública debe ser reducida en la cantidad de funciones o empleos, está totalmente contemplado en los incisos.

Si el diputado Heredia leyera con detención el artículo nuevo presentado, se sentiría ampliamente satisfecho. En cuanto quiénes serían los destinatarios del artículo, evidentemente es una medida igualitaria para todos los sectores de la administración.

En cuanto a las modificaciones propuestas por el señor diputado por Santa Fe, de la minoría, entiendo que no son conducentes. En general algunas de ellas están contempladas en el articulado. La proposición referente a la reducción de las dietas y a la de los aguinaldos, si bien en cierta manera interpretan el espíritu de este artículo, no conciben con la realidad económica y con el actual costo de vida.

Por otra parte, el hecho de que propugnemos racionalizar la administración pública, y moralizarla, no significa que los agentes servidores del Estado deban ver reducidas sus entradas. Por el contrario, a través del escalafón del personal civil de la Nación, se trata de crear la carrera administrativa, inclusive de iniciarla con un sueldo básico superior al vigente. Y si se trata de racionalizar, es precisamente para que la carrera administrativa tenga asegurada, a través de los haberes de cada funcionario, lo necesario para que él encuentre en la remuneración un estímulo para dedicarse con toda preocupación a servir y cuidar los intereses del Estado.

Sr. Rodríguez Araya. — Cuando el señor diputado por Santa Fe dice que los jubilados percibirán el 80 por ciento, ¿quiere decir el 80 por ciento del 82 por ciento establecido por ley?

Sr. Prece. — Quiere decir un anticipo de lo que por las leyes jubilatorias corresponde.

Sr. Rodríguez Araya. — ¿Podría decirnos cuántas cesantías necesitará el Poder Ejecutivo?

Sr. Prece. — Se está estudiando la racionalización, y el Poder Ejecutivo verá en qué medida puede ir reduciendo el plantel de sus servidores, de modo de no crear el problema social de la desocupación.

Una vocación indiscutida de todos los diputados que integramos esta Cámara es defender y asegurar el ingreso de lo que significa cubrir el costo de vida; pero no se puede negar que la administración pública necesita un ordenamiento. Nosotros no entramos a decir cuáles son las medidas necesarias para ese ordenamiento. Todos sabemos que hay males que son un producto de arrastre a través de los años. Hoy yo recordaba que la provincia de La Pampa, que recién comienza su organización institucional, apenas insume un poco más del 30 por ciento de sus recursos presupuestarios en atender los sueldos de su personal, destinando el resto a obras reproductivas. Estoy seguro que si en la provincia de La Pampa no se aplican normas como las que consideramos, con el transcurso del tiempo verá cambiadas sus cifras: pronto el 70 por ciento será insumido por los agentes, y el 30 por ciento, destinado al desarrollo de la provincia.

Por eso es que estas normas de ordenamiento deben darse en el momento financiero angus-

tioso que vive la Nación, a fin de que repercutan en todo el territorio y en todas las esferas donde la burocracia deba ser organizada.

Nadie puede decir que esta ley tiene por finalidad producir cesantías en masa. Yo no puedo informar sobre cuántas serán las vacantes que habrán de producirse en la administración pública; pero el señor diputado por Santa Fe estará conmigo en que habrá que producir tantas como sean compatibles con las posibilidades económicas de la Nación.

Por lo expuesto, y en atención a ser el que habla autor del proyecto, no acepto las modificaciones propuestas por el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Goldstraj. — Coincido con los conceptos expuestos por el señor diputado Heredia y pienso en los graves problemas que la medida que consideramos puede crear a un importante sector de la población argentina.

Por ello, y porque considero que los obreros argentinos no pueden pagar culpas ajenas o desaciertos de gobiernos pasados; convencido de que la crisis no ha sido producida por la masa trabajadora; que tampoco los aumentos de salarios pueden haber creado la inflación; y seguro como estoy de que podría reducirse quizá la capacidad adquisitiva de la población con esta medida, en perjuicio del desarrollo industrial, sin entrar al fondo de la cuestión y consecuente con lo que decidí nuestro bloque, pido a la comisión que acepte el agregado que voy a proponer a continuación: «El Poder Ejecutivo considerará la posibilidad de acordar créditos a los agentes del Estado comprendidos en esta disposición, que deseen organizarse económicamente para contribuir al desarrollo de la producción nacional.»

Sabemos, señor presidente, que las instituciones bancarias no siempre —como ya lo he dicho alguna vez en este recinto— están al servicio del sector más modesto de la población, no obstante provenir sus fondos de los depósitos que aporta el sector trabajador de la población argentina.

En previsión de que muchos de los hombres que serán afectados puedan reunir las condiciones necesarias para dedicarse a alguna actividad industrial o comercial útil para los planes de desarrollo nacional, propongo a la comisión tenga a bien aceptar este agregado, con el cual se crearía —como digo— la posibilidad de que los bancos oficiales, reduciendo los créditos que a veces otorgan sin razón a los grandes empresarios, acuerden modestos créditos a los miles de hombres que deberán soportar las consecuencias de esta medida y puedan así incorporarse plenamente a la vida económica nacional.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Silveira Márquez. — Señor presidente: voy a señalar el disenso de la bancada de la Unión Cívica Radical del Pueblo con el proyectado artículo propuesto por el señor diputado Prece y que será —sin duda— sancionado esta noche por la Honorable Cámara.

Advierto a los señores diputados que haré una breve exposición de carácter objetivo, limitándome solamente a los fundamentos jurídicos que, evidentemente, son los que para nosotros, juntamente con otros de carácter ético y social, han de gravitar enormemente en el país frente a una medida como la que se propone.

Desde antiguo el derecho al trabajo fue considerado por todas las legislaciones orientales y occidentales. Ya el viejo *Deuteronomio*, el derecho romano, el antiguo derecho anglosajón, transvasado más tarde a las nuevas colonias de América, determinaban cuáles eran los derechos esenciales que correspondían a la criatura humana como ente de una sociedad.

Entre nosotros, en el siglo pasado, un pensador argentino de gran alcurnia, como Echeverría, en el *Dogma de Mayo* estableció las siguientes frases que son un pensamiento jurídico y social y que posiblemente fueron las que posibilitaron en el decurso de los tiempos la estructuración del derecho del derecho al trabajo. Decía Echeverría que la sociedad sólo podría ejercer sobre sus miembros la acción, si da protección a las personas sus bienes y su libertad. Se obliga a ponerlos a cubierto de toda injusticia y violencia y a proporcionar los medios para trabajar, sin estorbo alguno. Y los medios para trabajar sin desmedro alguno son los derechos esenciales consagrados por las nuevas cartas, entre ellas la del Atlántico y la de San Francisco, que es la fundamental de las Naciones Unidas.

Así, en el decurso del tiempo se va dando forma y cohesión a este viejo derecho al trabajo.

Las constituciones modernas de México, de 1917; la de España, de 1936; la de Nicaragua; la de Perú, de 1947; la de Uruguay, de ese mismo año; la de Brasil, de 1952, establecen en forma clara y efectiva este derecho.

Dentro de la Constitución Nacional, en la parte general de la Sección Primera —Derechos, Declaraciones y Garantías— estaba implícitamente acordada; pero es en 1957 cuando la Asamblea Constituyente de Santa Fe incorporó el derecho social y el derecho del trabajo. En el artículo 14 actual, se da protección contra el despido arbitrario y estabilidad al empleado público. Se ha puesto en la Constitución de Santa Fe la parte general de los derechos que atañen al ciudadano y al habitante en general para que pudiera ser una ley general en el país, es decir para que

las constituciones de provincias pudieran recogerla.

Sin entrar al análisis de los motivos expresados por el autor del artículo, quiero mencionar las situaciones que se plantearían frente a los casos de cesantías, teniendo en cuenta que los derechos constitucionalizados en el artículo 14 cubren al agente del Estado su estabilidad. Esa estabilidad no puede trocarse en indemnización.

El agente administrativo, frente al despido, tendrá dos caminos. Uno de ellos sería recibir la indemnización que propone el señor diputado Prece, agravada por el hecho de que se pagaría por mensualidades. En este caso el hecho estaría consumado y el agente de la administración pública no tendría nada más que reclamar.

El otro camino sería que el ex agente se negase a recibir la indemnización y recurriera a la justicia en virtud del derecho que la Constitución consagra y ampara. Posiblemente se presentarían centenares o miles de demandas; el Estado nacional, las provincias o las municipalidades se verían envueltos en pleitos con sus ex agentes porque, de acuerdo con la última acordada del Superior Tribunal de Justicia del país, todos los derechos enunciados, explícitos o implícitos en la Constitución Nacional gozan de la acción de amparo si ella es interpuesta en la sede judicial.

A través de esta acción de amparo el agente administrativo, el agente del Estado, recurriendo a la sede judicial, podría solicitar el reconocimiento de su derecho quebrantado y el juez ordenaría al poder administrador, como una medida previa, que se lo sostenga en su derecho esencial, que es el derecho a la estabilidad.

Este es uno de los motivos fundamentales que mueve a la bancada de mi partido a disentir con el enunciado propuesto por la bancada de la mayoría. Por esta vía llegaremos a conclusiones que serán perniciosas para el país.

Así, brevemente expuesto, dejo sintetizado el pensamiento y el criterio de nuestro bloque, que entiende se ha de perturbar la armonía que ha determinado la Constitución Nacional, al incorporar en su articulado un concepto, cual es el que garantiza al agente del Estado su estabilidad esencial en el empleo.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parodi Grimaux. — Voy a apoyar, con la mayor brevedad posible, el artículo propuesto por el señor diputado Prece, y a contestar especialmente las objeciones hechas por el señor diputado preopinante.

A mi juicio, el señor diputado por Misiones ubica este asunto en un terreno inadecuado, porque aquí no está en juego el derecho a trabajar. Es indudable que la cláusula constitucional incorporada al artículo 14 en la última Convención Constituyente realizada en Santa Fe es-

tablece la estabilidad del empleado público, pero esta estabilidad no es irrestricta sino condicionada ya que, de acuerdo a los propios términos de la Constitución, todas las garantías y derechos se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.

Estos dos preceptos constitucionales deben vincularse asimismo con el artículo 86, inciso 10, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y remover a los empleados de la administración pública, cuyo nombramiento no esté reglado de otra manera en la Constitución. El artículo que se proyecta, relacionado directamente con estas disposiciones constitucionales, determinará, por tanto, la forma en que el Poder Ejecutivo puede remover a agentes de la administración pública.

Los fines del Estado no pueden realizarse sin la actividad física o intelectual de esas personas que llamamos funcionarios, empleados o agentes de la administración pública. Por eso los agentes son nombrados respondiendo a una causa, que es lo que el profesor Bielsa denomina causa del nombramiento, que consiste en la necesidad de realizar una función destinada a procurar fines del Estado.

Si el servicio se suprime cesa la causa de la designación, por lo que la extinción de la relación pública es su consecuencia virtual y necesaria, como es virtual y necesaria, frente a la extinción de la causa del nombramiento, la cesantía o la situación de disponibilidad del agente de la administración.

El funcionario es necesario en tanto y en cuanto es indispensable para la administración pública la función que el funcionario desempeña, pues la función, dice el citado autor, pide al funcionario, y no el funcionario a la función.

El proyecto del señor diputado Prece dice así: «Autorízase al Poder Ejecutivo para que, frente a la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, reduzca funciones o empleos», y establece la indemnización para agentes de la administración pública que cesen en sus cargos en virtud de haber desaparecido la función o empleo para los cuales habían sido designados. Es decir que de acuerdo a lo que decía anteriormente, el empleado cesará porque terminó la causa que generó su nombramiento y no arbitrariamente.

Nuestro partido antes de llegar al gobierno, y desde éste mediante la palabra del señor presidente de la República, de los señores ministros y de los legisladores, ha prometido un reajuste necesario de la administración que implique una reducción apreciable del déficit. Ello se conseguirá mediante la racionalización de las funciones y de los servicios públicos.

No es, entonces, una posición antojadiza la nuestra. Este artículo es una herramienta legal necesaria para cumplir aquellos planes que han sido expresados con claridad por los funciona-

rios del gobierno y por los representantes de nuestro partido. Para mayor conformidad debo recordar que la necesidad de racionalizar las funciones y los servicios públicos no ha sido reconocida sólo por nuestro partido, sino que es una especie de dogma aceptado por casi todos los sectores de la población argentina. La prensa, en general, admite la necesidad y urgencia de esa racionalización; casi todos los partidos políticos han expresado que es ineludible e inostergable la adopción de la medida; la opinión pública, sobre todo los sectores obreros, están de acuerdo en que hay un exceso de funcionarios públicos y en que existe una falta de racionalización de las funciones.

Creemos, sinceramente, que mediante un estudio detenido y técnico de las distintas actividades que realiza el Estado, se podrá llegar a ordenar de tal manera las tareas que se producirá una reducción de funciones y empleos que, lógicamente, implicará la cesantía de agentes de la administración.

Sabemos que este problema puede ser contemplado desde dos puntos de vista: el constitucional o legal y el de los intereses sociales. Estamos perfectamente seguros y convencidos de que las normas constitucionales no serán afectadas por el artículo proyectado por el señor diputado Prece, que, en última instancia, constituirá una reglamentación provisional de la cláusula constitucional. Anteriormente la facultad de designar y remover los empleados no estaba reglada. Sabemos que las dos teorías del derecho administrativo son la de la facultad reglada y la de la facultad discrecional, y que el avance en este sentido se produjo cuando se comenzaron a dictar los distintos estatutos de los funcionarios públicos.

Este artículo no implica otra cosa, pues, que el ejercicio del derecho de reglar el nombramiento y cesación de los empleados públicos. Con relación al aspecto social, no ignoramos que esta medida en cierto modo va a provocar —aunque ratifico que no se van a realizar cesantías en masa— situaciones delicadas para algunos empleados de la administración pública.

Es fácil comprender que ninguna de estas medidas es simpática, y por ello es también fácil percibir que si un gobierno que depende del apoyo del pueblo, como el nuestro, decide tomar medidas de esta naturaleza que pueden resultar lesivas de intereses populares, es porque está convencido de la necesidad ineludible de adoptarlas.

Para paliar en cierta medida las consecuencias que producirá esta racionalización en los servicios, el proyecto del señor diputado Prece ha establecido, en la forma en que figuran en el despacho, las indemnizaciones correspondientes.

Sr. López (J. R.). — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con permiso de la Presidencia?

Sr. Parodi Grimaux. — Sí, señor diputado.

Sr. López (J. R.). — Deseo que el señor diputado por Entre Ríos me informe si en los términos «administración pública» están comprendidas las fuerzas armadas.

Sr. Parodi Grimaux. — La pregunta del señor diputado por Córdoba me coloca en una posición un poco extraña, porque ésta no es una cátedra, ni yo soy profesor. No obstante, en respuesta, manifiesto que, en mi concepto, las fuerzas armadas son un servicio público.

Nos hemos referido en términos generales a los funcionarios públicos, sin hacer la distinción doctrinaria entre funcionarios y empleados, ni entre servicio o función.

Sr. López (J. R.). — He querido hacer esta aclaración por lo siguiente: todos los diputados sabemos que en las fuerzas armadas hay exceso de personal, y sin embargo en sus distintas reparticiones se sigue haciendo propaganda mediante la cual se invita a los jóvenes para que se incorporen a alguno de los sectores de las fuerzas armadas.

Yo interpreto —y por eso he querido hacer esta salvedad— que en esta etapa de la vida del país la medida que se proyecta es revolucionaria, porque se evitará que ser empleado público sea un privilegio, que un grupo de argentinos desequilibre el presupuesto, y porque es la primera vez que un gobierno surgido del voto popular va a afrontar con decisión la racionalización de la administración pública. Pero yo interpreto que es revolucionaria siempre y cuando esa racionalización afecte a todos los sectores de la burocracia.

Sr. Parodi Grimaux. — Insisto en que no hice ninguna distinción. Además, me parece lógico que si se resuelve racionalizar la actividad del Estado, se tratará de racionalizarla en todos los aspectos de la administración. Y las fuerzas armadas forman parte, en cierto modo, de la administración del país. Para no incurrir en posibles confusiones de carácter doctrinario, no he querido entrar en la distinción, como ya dije, entre servicio y función pública.

Aparte de las medidas previstas en el proyecto presentado por el señor diputado Prece, para mitigar en cierto modo los problemas que se creen al personal que deba abandonar la función pública, existe un plan del gobierno que, aplicado, derivará a ese personal hacia la actividad privada, lo que significará aportar la colaboración de gente capaz a los nuevos comercios e industrias que se van a instalar en el país.

Sr. Prece. — Para una breve aclaración, pido la palabra.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Por vía de interpretación, quiero significar que el proyecto comprende a todos los funcionarios y agentes de la administración pública.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Liceaga. — Señor presidente: quiero llamar la atención de la Honorable Cámara sobre el carácter que tiene la proposición hecha por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la sesión realizada el día 22 del mes pasado, de agregar un artículo de escalafón para el personal de la administración pública al proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo; y también sobre el carácter que tiene ese mismo artículo con las modificaciones que hoy propicia.

Tal propuesta no responde a una actitud antojadiza, ni tampoco a una situación inconsulta, provocada por una voluntad orientada en un sentido ajeno al bien público. Tampoco es una tentativa aventurada de golpear sobre la realidad argentina para lograr un resultado incierto. Por el contrario, tiene finalidades precisas y una concepción clara y terminante. Son los fenómenos económicos y los resultados de su análisis los que han dado lugar a una medida como la propuesta por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El mencionado artículo es consecuencia de los estudios acerca de la influencia que tienen los gastos públicos sobre la estabilidad económica argentina y encuadra en un plan concreto y orgánico del gobierno nacional, de modo que no busca, como se ha afirmado en esta Cámara, solucionar situaciones de aparcería política.

El señor presidente de la República ha sido consecuente con sus principios al propiciar una política que atempere la incidencia que tienen los gastos públicos y los sueldos de los empleados del Estado en el presupuesto, con respecto a los fenómenos monetarios.

Así decía en el mensaje que pronunció el 19 de mayo: «Los gastos del Estado han alcanzado considerable volumen. Al presupuesto preventivo publicado oportunamente, se ha sumado una importante masa de necesidades financieras, algunas ya autorizadas y otras en trámite de serlo, que llevarán el total de gastos públicos a triplicar aproximadamente los registrados dos años y medio atrás. De ese conjunto de gastos, sólo el 54 por ciento tiene resuelta su financiación. Para el 46 por ciento restante, que comporta el déficit potencial más extraordinario en la historia financiera argentina, habrá que obtener recursos excepcionales en forma urgente. Si no nos dispusiéramos a adoptar drásticas medidas, la administración pública se vería amenazada, a corto plazo, por la cesación de pagos.

«Ese déficit —continuaba el señor presidente de la Nación— no podrá reducirse substancialmente, puesto que la mitad del ejercicio financiero está cumplido y gran parte de los gastos previstos se originan en compromisos ya formalizados. Por otra parte, dentro de los recursos computados están incluidas todas las fuentes financieras de carácter fiscal o crediticio, permanentes o transitorias, que estaban al alcance del tesoro público. Eso significa que, irremediablemente, el gobierno constitucional deberá arbitrar nuevos recursos mediante una mayor presión impositiva o inflacionaria, para hacer frente a una enorme masa de gastos carentes de sustento financiero.»

En el mismo mensaje, anticipando la actual actitud, decía el señor presidente de la República: «El gobierno afrontará el problema y dará estricto cumplimiento a las obligaciones contraídas por la administración pública. Las exigencias del desenvolvimiento económico a que debe ajustarse la política financiera indicarán si esa provisión urgente de fondos se hará por vía del endeudamiento, del impuesto o de la emisión monetaria. Pero desde ya el Poder Ejecutivo compromete su decisión de adoptar severas economías para detener ese proceso que amenaza con paralizar el esfuerzo nacional, esfuerzo que todos queremos ver encaminado hacia el progreso económico y la elevación de las condiciones de vida de toda la población».

Esa expresión del señor presidente de la República es coincidente también con lo que dijera el 29 de diciembre en el mensaje que propalara al pueblo argentino anunciando un plan de reactivación económica y de austeridad. Decía entonces que una de las principales causas de la inflación han sido y continuarán siendo los excesivos gastos públicos. También indicó que el déficit de la administración pública debe ser eliminado drásticamente. Señaló el monto a que alcanzaba el presupuesto nacional y también el déficit de casi el 50 por ciento en relación a lo que tenía que pagar el gobierno argentino para cumplir con ese presupuesto, por medio de sus recursos propios y por medio de un proceso de inflación.

La exigencia emisionista que va impuesta por esa diferencia entre los recursos propios y los gastos de la Nación está determinada por tres factores fundamentales, que son: el monto total de los sueldos de la administración pública, el déficit de las empresas del Estado y los subsidios a los combustibles. No tenemos por qué analizar en este momento los factores relativos a los subsidios a los combustibles y al déficit de las empresas del Estado. Pero sí debemos referirnos con seria posición al motivo de este artículo. Lo contrario sería evadirnos de una situación que es concreta y clara.

Sólo me referiré, pues, a la influencia de los sueldos. En síntesis, los empleos otorgados, usufructuados o realizados en mayor cantidad que lo requerido por los servicios atinentes a la función pública, determinan en sí una diferencia entre las necesidades existentes de trabajo para cumplir con los compromisos de la función pública del Estado y lo que se ofrezca como trabajo necesario para esa función. Se determina con eso un mayor pago de sueldos, pero no hay una producción de servicios que esté vinculada al monto de los sueldos que se están pagando. Hay más numerario a distribuir entre mercancías y servicios que no están realizados ni producidos en el mismo monto e importancia que tiene el pago de sueldos a los empleados públicos. Esta situación concreta en sí ya un proceso cuantitativo a la realización inflacionaria que estamos soportando.

Esta política enerva toda la realización económica de producción y de comercio en el país, y se enervan también los bienes que se tienen que producir para satisfacer las necesidades. De ese modo también se gravita cuantitativamente sobre el proceso inflacionario.

El empleo público lleva a una masa de hombres y mujeres capacitados para un trabajo realizador hacia la actividad menos productiva que hay en el país. Y así se dejan atrás todas las posibilidades de utilización de la técnica en todos los aspectos agrarios, industriales, comerciales, de transportes y de distribución. De este modo existe una posibilidad menos para exaltar la producción argentina y se aumentan las perspectivas de ampliación de los procesos cuantitativos de la inflación.

Este proceso va influyendo en la economía argentina, por incidencia de las inversiones consumidas por una masa de empleados que no ejercen su trabajo ni su función, y que son una especie de superzócalo que concreta toda una realización multiplicadora de los efectos de la aplicación de numerario sobre las estructuras económicas.

Se cristaliza, en especial, una aplicación técnica y práctica del fenómeno estudiado por Knapp, sobre las inversiones en las actividades económicas que provocan la aceleración del movimiento de dinero y que después desarrolló Keynes a través de la aplicación de la teoría del multiplicador, y de la tendencia a ahorrar o a invertir, proceso este último que en sí incita a la inflación.

Cuanto mayor es la tendencia a invertir o a gastar, es menor la tendencia a ahorrar. La tendencia a ahorrar está desarrollada en la esfera de los altos capitales, o sea en las altas expresiones de las estructuras sociales de cualquier país, pero no se da entre los empleados públicos, quienes son proclives a gastar los sueldos que perciben. Y así se aplica, en este

proceso, las posibilidades de ampliar por incidencia multiplicada los efectos reproductivos de los procesos inflacionarios.

Si existe, señor presidente, una masa de empleados que no trabaja, o que produce lo que debe producir un menor número, en los servicios de la administración pública argentina se está desarrollando una especie de estructura que significa crear un factor de horas-trabajo en desocupación.

Esto va a orientar, y está orientando, la política argentina en materia de empleos, y hace que nosotros creamos que tenemos ocupación plena, pero lo que en realidad sucede es que estamos pagando un subsidio a la desocupación de las horas-trabajo de los empleados que están de más en la administración pública. Eso contradice la definición de la ocupación plena.

El doctor Silveira Márquez se ha referido al derecho al trabajo que tienen todos los hombres de nuestro país. Pero es bueno aclarar que el derecho al trabajo que tienen todos los habitantes de nuestro suelo no está implicando un subsidio a la desocupación.

Habló también el doctor Silveira Márquez de los amparos constitucionales, de la estabilidad de los empleados públicos y de los hombres que trabajan en nuestro país. Pero no puede haber un amparo constitucional para un empleado público cuando ese amparo está conspirando contra toda la estabilidad económica de nuestro país y contra la integridad de la Nación.

En toda la historia de nuestra integración nacional hay una expresión fundamental que debe orientar el pensamiento de todos: no hay nada en la Nación superior a la Nación misma. Si analizamos cuáles son los factores que más influyen en la estabilidad social actual en nuestro país, veremos que todos están condicionados al valor adquisitivo de la moneda. Si nosotros no adoptamos medidas drásticas para solucionar el problema de la estabilidad monetaria, conspiraremos contra la paz social argentina.

Quiero expresar cuál es la contradicción de quienes se oponen a las medidas del gobierno argentino. Estiman que debe darse estabilidad a los obreros y empleados sin considerar que reciben un subsidio a la desocupación y que están creando condiciones de inflación y de desvalorización de la moneda. También originan la disminución del poder adquisitivo de los sueldos y al mismo tiempo crean condiciones de inseguridad social, lesionando el poder adquisitivo de la totalidad de los obreros del país.

Sr. González. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Liceaga. — Sí, señor diputado.

Sr. González. — El ajustado análisis que el señor diputado Liceaga hace del panorama se

traduce concretamente en este hecho: millares de empleados públicos que están en sus cargos como consecuencia del propósito de la retribución de la solidaridad política del agente, y que no puede seguir ejercitándose en el país, pues el presupuesto de la Nación es deficitario, obligan todos los meses a aumentar la masa de dinero en circulación para pagar los sueldos de la administración pública. Yo denuncio que esto es una traición a los auténticos trabajadores, los que, como consecuencia de ese subsidio a la desocupación, ven reducidas sus retribuciones para mantener a un sector parasitario de la economía argentina.

Sr. Silveira Márquez. — ¿Acaso ellos son responsables de esa situación?

Sr. Liceaga. — Señor presidente: ahora quiero referirme a palabras pronunciadas por el señor diputado Rodríguez Araya relacionadas con las dietas y emolumentos de los legisladores nacionales.

Respecto de este asunto, debemos ser valientes y decir la verdad. Siempre ha sido una jactancia de los hombres que actuaban en la época de la oligarquía ilustrada la renuncia de retribuciones correspondientes a las funciones que desempeñaban. Ellos representaban el sentido de los intereses propios de la tierra y de las riquezas que poseían.

Sr. Rodríguez Araya. — Seguramente el señor diputado no se refiere a Hipólito Yrigoyen.

Sr. Liceaga. — Me he de referir a alguien que parece haber inspirado al señor diputado por Santa Fe.

El 4 de junio de 1943 se constituyó el gabinete, el que fue integrado por un ministro de Hacienda que poseía muchas estancias: el señor Jorge Santamarina. El renunció a su retribución y colaboró en un gobierno cuyas consecuencias todavía estamos soportando. Ese es el sentido de la renuncia que se puede realizar con relación a las remuneraciones. ¿Qué nos podrá imputar el pueblo cuando juzgue nuestra conducta, si hemos cobrado diez o quince mil pesos, cuando nos estamos sacrificando en estas bancas para servir al país? Aquí no se está jugando el minúsculo propósito de ganar un aplauso en la plaza pública, sino que estamos cumpliendo con nuestro deber. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Rodríguez Araya. — ¿Es por el aumento ese aplauso?

Sr. Vinciguerra. — Usted también ha de vivir con trescientos pesos.

Sr. Parodi Grimaux. — Por otra parte, las dietas son renunciabiles.

Sr. Rodríguez Araya. — Renunciémoslas todos.

Sr. Parodi Grimaux. — No creo que el señor diputado done la dieta.

Sr. Rodríguez Araya. — Si usted me acompaña...

Sr. Parodi Grimaux. — Es propaganda para aparecer en los diarios.

Sr. Presidente (Decavi). — Ruego a los señores diputados que no dialoguen.

Está en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Liceaga. — Estimo que el señor diputado Rodríguez Araya, que está actuando con responsabilidad, no tiene que renunciar a la dieta para merecer la consideración del pueblo argentino.

Quiero señalar lo que va a significar esta política del gobierno argentino para con el pueblo y para con la estructura nacional. El gobierno busca con estas medidas desalentar formas negativas, enfermizas, de nuestra economía. Quiere romper con cuanto implique el aplazamiento de nuestras posibilidades. El gobierno quiere evitar la emisión inflacionaria, y por eso adopta estas medidas.

Ha de desplazar la mano de obra improductiva a actividades productivas. Ha de buscar una ocupación que no señale los plasmas provocadores de procesos productivos enervados. Ha de canalizar la economía presupuestaria hacia la prestación de servicios eficientes. Ha de suprimir los subsidios a la desocupación y ha de levantar con eso la moral de los hombres que reciben ese subsidio, o sea que están desocupados y que aparecen como empleados públicos. Ha de fomentar salarios reales y efectivos, necesarios en un régimen de estabilidad social y de justicia.

Por eso, los hombres de la bancada de la Unión Cívica Radical Intransigente hemos de votar la proposición formulada por el señor diputado doctor Prece. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rodríguez Araya. — Señor presidente: he escuchado con suma atención a todos los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, y he tenido la misma emoción que los señores diputados Heredia, Goldstraj y López al formular su requerimiento sobre el planteamiento formulado por el señor diputado Prece, que no consulta la voluntad ni el sentimiento de nuestro pueblo.

Nadie podrá dudar de mis intenciones respecto a los agregados que he propuesto. El país atraviesa por serias y graves dificultades, pero creo como el diputado Heredia que la crisis tendrá que soportarla la clase trabajadora del país sin ningún sacrificio por parte de la clase privilegiada. Lo ha dicho él y lo repito yo. Es necesario que así sea.

El problema de la austeridad tiene dos fases. Una la constituye un fondo moral auténtico, sobre la que debemos resolver; la otra, su aspecto económico, que hay que consultar.

Entiendo lo que es la política, y la tomo como el ejercicio de un apostolado. Así a practiqué siempre. En la calle y en la función pública. Cuando pedimos sacrificios al puerlo trabajador, debemos ser nosotros los que demo. el primer ejemplo, porque somos sus conductores y auténticos representantes elegidos para integrar el Parlamento.

Nada tiene que ver aquí la oligarquía conservadora. Me he inspirado en ejemplos limpios que me ha proporcionado el radicalismo. Me asombra que se afirme que sólo los ricos, con la reducción de las dietas, podrían llegar al Parlamento. Yo me he inspirado en Leandro N. Alem, la figura más romántica de la política argentina, que entregaba gran parte de sus dietas a los necesitados. Dos figuras señeras nos enseñan que con la función política no se especula. Que el hombre político debe ser sacrificado y abnegado. Un manto de silencio cubre a los que no supieron ser intérpretes cabales dándole un alcance distinto a la palabra política. Creyeron entraba ella en el campo del comercio y la especulación. Desgraciadamente éstos han dejado aventajados discípulos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Yrigoyen renunció también a sus sueldos. Vivió una vida ingrata y dolorosa al servicio de la nacionalidad. Todavía hay quienes no lo comprenden, aunque lo aprovechan. El país, asombrado, contempla una puja sostenida en el aumento de las dietas. En las provincias y comunas se aumentan; sin embargo, legislamos para dar salida a una enorme cantidad de trabajadores que dependen del presupuesto nacional. ¿En qué estamos?

Sr. Cortés. — Yo pregunto al señor diputado por Santa Fe si la diputación nacional en este país sólo puede ser para los plutócratas.

Sr. Rodríguez Araya. — Las diputaciones nacionales son para los hombres capaces de sacrificarse.

Entiendo que con una rebaja de 17.500 a 10.000 pesos haremos un sacrificio que la Nación nos exige. Nosotros debemos hacerlo, más aún si pretendemos que otros lo hagan.

Ruego a los señores diputados que en lugar de interrumpirme por las dietas, lo hagan por otra cosa.

Sr. Solanas. — ¿Me permite?

Sr. Rodríguez Araya. — Sí, señor diputado.

Sr. Solanas. — Ruego a su lealtad indiscutida que rectifique la cifra de 17.500 pesos, porque el señor diputado por Santa Fe sabe que hay disposiciones reglamentarias en las cartas orgánicas de los partidos políticos que cercenan las dietas de los diputados.

Sr. Rodríguez Araya. — Nuestra dieta es de 17.500 pesos, y si tenemos compromisos partidarios, es lógico que podamos tener también algún compromiso con la Nación. Esta es superior a aquéllos.

Sr. Solanas. — Lo que deseo es que quede sentado que la cifra de 17.500 pesos es nominal.

Sr. Cánepa. — El señor diputado Rodríguez Araya sabe que si se disminuyera la dieta tendríamos que legislar sin la concurrencia de los diputados del interior.

Sr. Vinciguerra. — Los señores diputados de la oposición han ganado dietas sin estar presentes en el recinto.

Sr. Rodríguez Araya. — Vamos a hacer un cómputo de los días en que los señores diputados no contribuyeron a formar quórum, teniendo una abrumadora mayoría en la Cámara.

¿A los señores diputados les molesta tanto que hable de las dietas? ¿Por qué no puedo exponer mi pensamiento al respecto?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Decavi). — Ruego a los señores diputados que no dialoguen.

Sr. Tecco. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Rodríguez Araya. — Sí, señor diputado.

Sr. Tecco. — En tanto que los legisladores cumplamos con responsabilidad la obligación que impone el cargo, la retribución justa corresponde al trabajo realizado por cada uno.

Yo invito al señor diputado Rodríguez Araya, que tiene el propósito de realizar economías en el sentido expresado, a que en vez de su forma acostumbrada de señalar la inasistencia de señores diputados a la Cámara, solicite la aplicación de las disposiciones reglamentarias pertinentes para que sean descontadas las dietas de quienes no concurren a cumplir con su deber.

Sr. Rodríguez Araya. — No hay inconveniente. Muchos se quedarían sin dieta.

Sr. Tecco. — De ese modo no se lesionará la retribución de los diputados que sin tener otros ingresos nos consagramos al desempeño de la función legislativa.

Sr. Rodríguez Araya. — Yo pregunto si mi sugerencia de que nos impongamos un sacrificio puede molestar a algún legislador.

Sr. Juárez Peñalva. — De ningún modo.

Sr. Rodríguez Araya. — Entonces exijo que se escuchen con tranquilidad los fundamentos que hacen atendible este proyecto que he ofrecido como complemento del presentado por el señor diputado Prece.

Sr. Monte. — ¿Me permite el señor diputado? Personalmente, por mi parte, y en lo que atañe al sector mayoritario también, no hay ninguna preocupación, porque la tesis que sostiene el señor diputado por Santa Fe está definitivamente derrotada en este país y en todo el mundo. Es una tesis reaccionaria, mediante la cual se llega a la conclusión de que en las bancas del Congreso sólo pueden sentarse los hombres de grandes posibilidades económicas.

Yo declaro que no tengo estudio abierto para atender juicios que me ayuden a aumentar mi presupuesto.

Sr. Rodríguez Araya. — Si el señor diputado hace alusión a mí, declaro que yo lo tengo abierto para atender solamente asuntos gratis.

Sr. Monte. — Me alegro que así sea. Yo estoy dedicado íntegramente a mi función de diputado.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Decavi). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Rodríguez Araya. — Para que los señores diputados no me molesten y me agasajen voy a proponer el aumento de las dietas.

Sr. Monte. — De ninguna manera...

—Hablan a la vez varios señores diputados.

Sr. Rodríguez Araya. — Agradeceré que no me interrumpán. Déjenme hablar.

Sr. Presidente (Decavi). — Está en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe. La Presidencia hará respetar al señor diputado.

Sr. Rodríguez Araya. — Quiero que quede establecido que no discuto si la dieta alcanza o no. Eso no viene al caso. Afirmino que debemos ser los primeros en el sacrificio. Nosotros, sí, que nos estimamos padres de la patria. Y si a nosotros no nos alcanza, percibamos lo que les sucederá a los que tienen que acomodar su presupuesto a sumas que a veces no exceden los mil, dos mil o tres mil pesos.

Yo pregunto si se puede hacer un planteo de austeridad en la República cuando hay funcionarios que el 1º de enero de este año han cobrado 25.000 pesos por sueldo y 25.000 en concepto de aguinaldo. Es decir, que les han dejado la mesa servida durante el año 1959, mientras hay ciudadanos, como ya dije, que con 1.500, 2.000 ó 2.500 pesos mensuales no van a poder soportar la crisis que tendrá la República.

Yo les pregunto a los señores diputados si no es posible que entre todos podamos confeccionar un plan de austeridad que todos soporten en justa proporción. Yo pregunto, señor presidente, si la creación de puestos realizada en la sociedad Bemberg, con compensación de 16.000 pesos de sueldo y con fuerte aguinaldo, puede entrar en un plan de austeridad; si es posible que en el Banco Hipotecario se hayan acordado dos aguinaldos.

Sr. Heredia (B. M.). — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Rodríguez Araya. — Sí, señor diputado.

Sr. Heredia (B. M.). — Quiero manifestarle al señor diputado que el otorgamiento de esos dos aguinaldos es una conquista lograda por los compañeros bancarios a través de la lucha sindical. Hace aproximadamente tres años y de acuerdo con convenios realizados, los empleados bancarios perciben doble aguinaldo. De modo que no ha sido solamente este año, como ha dicho el señor diputado.

Sr. Rodríguez Araya. — Las conquistas gremiales deben ser respetadas, pero el plan de austeridad hay que imponerlo desde arriba, como dijo el señor diputado por Santa Fe. Yo renuncio a cualquier conquista para salvar la economía e independencia del país.

Yo pregunto si es posible que en la administración pública estén infiltrados militares en retiro que tienen dos puestos. Esto es una pústula que tiene la Nación. ¿Por qué no los sacamos primero a ellos?

Sr. Presidente (Decavi). — Invito al señor diputado por Santa Fe a dirigirse a la Presidencia y no hacer alusiones personales.

Sr. Rodríguez Araya. — Ninguno de los señores diputados es militar. Entonces, ¿qué alusión personal he hecho?

Sr. Solanas. — Ya hemos considerado también la incompatibilidad de los militares.

Sr. Presidente (Decavi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rodríguez Araya. — Entiendo, señor presidente, que todos estos problemas tienen que ser resueltos cercenando a los que ganan más y no a los que tienen menos ingresos. No pueden pretender los señores diputados que en lo sucesivo una familia pueda vivir con dos mil quinientos pesos, que no alcanzan para proporcionar un kilogramo de carne diaria a la mesa del trabajador.

Sr. Solanas. — Para eso queremos racionalizar la administración, señor diputado.

Sr. Rodríguez Araya. — Es lógico que nos apretemos el cinturón los que tenemos gordura y no los que han perdido la cintura trabajando al servicio de la República.

Sr. Solanas. — Propongo que el diputado que espontáneamente pueda renunciar a su dieta así lo haga.

Sr. Rodríguez Araya. — No va a renunciar nadie, señor diputado. (Risas.)

Estoy asombrado de lo que escuché en esta Cámara durante la sesión en la cual se discutió la compra del «Warrior». El señor ministro de Marina me dijo que, económicamente, estábamos en condiciones como para hacer esa adquisición. También se ha alardeado de que el «Warrior» llegó con trescientos tripulantes, pero nos hacen reconocer que se necesitan mil doscientos hombres para que esa unidad esté en condiciones de navegar en forma normal.

¿Por qué no reducimos el servicio militar a seis meses y lo hacemos en dos tiempos? Con esto ahorraríamos de tal manera que el sacrificio del pueblo se reduciría enormemente.

Sr. Uzal. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Rodríguez Araya. — A usted no, señor diputado.

Sr. Uzal. — No creía que me tuviera tanto miedo.

Sr. Rodríguez Araya. — No se la otorgo porque se va a plantear alguna cuestión de privilegio.

Sr. Uzal. — Todas las veces que sea necesario, señor diputado.

Sr. Monte. — La compra del «Warrior» —y sin que esto sea una infidencia— se hizo con dinero proveniente de la venta de tres barcos viejos de la marina.

Sr. Rodríguez Araya. — ¿Y eso no es dinero nuestro, necesario para otras cosas? Eran divisas auténticas.

Sr. Carrera. — La compra la hizo el gobierno provisional.

Sr. Rodríguez Araya. — La compra la hizo este gobierno.

Sr. Monte. — Es inexacto. Lo desafío a que lo pruebe.

Sr. Rodríguez Araya. — Le voy a traer el decreto firmado por el doctor Frondizi.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Decavi). — Ruego al señor diputado por Santa Fe que se dirija a la Presidencia.

Sr. Rodríguez Araya. — Evidentemente, hay en este país sectores que quieren contribuir a la reestructuración económica de la República. Están los concejales de Chascomús, que también necesitan para vivir, pero que se han asignado un peso de sueldo. Y lo han hecho así porque la ley les obliga a imponerse un estipendio.

¿Qué preocupación puede causar a los señores diputados si reducimos las dietas para levantar y afirmar un poco la economía de la República? No dudo de que habrá en ese sector señores diputados que quieran hacer lo mismo.

No se dan cuenta ustedes que de no hacerlo nos encontraremos con que no habrá un freno. Todos querrán aprovecharse. Veremos las carreras por las dietas, haciendo el ridículo. Viviremos maldecidos. Insisto en que nosotros, y nadie más que nosotros, debemos dar el ejemplo y practicar la austeridad.

Sr. Solanas. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Rodríguez Araya. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Solanas. — Temo que si aceptamos el criterio del señor diputado por Santa Fe, algunos diputados que no disponen de más recursos que la dieta, porque han abandonado su actividad específica, no puedan vivir en la Capital con dignidad, con tranquilidad económica. Porque ya lo dijo Sancho Panza: «si pies llevan tripas, en realidad tripas llevan pies».

El hombre necesita tranquilidad económica para pensar y para actuar, y el plan de austeridad no se funda en la necesidad de nadie, sino en la amplia satisfacción del hombre que tra-

baja. El plan de austeridad, en el orden económico del Estado, se funda en suprimir remuneraciones de funciones innecesarias.

Hay que dar al hombre que trabaja al servicio del Estado una retribución digna, y como bien ha dicho el señor diputado, deben desaparecer de nuestra economía los sueldos de 2.500 pesos, que condenan al hambre vergonzante a dignísimos funcionarios del Estado. Queremos que haya retribución amplia y digna para todos los servidores del Estado.

Nosotros no venimos al Congreso Nacional a enriquecernos con las dietas, pero queremos que cuando nos sentemos en estas bancas lo hagamos con dignidad, que no haya diputados avergonzados por vestir un indumento limitado por razones económicas. Queremos que vengan con tranquilidad los diputados que no tienen otros ingresos, sabiendo que sus familias viven económicamente seguras como cuando ellos, al servicio de su economía personal, les podían brindar todo su esfuerzo, tal cual lo hacen hoy, en que prestan sus servicios a la colectividad.

Sr. Rodríguez Araya. — No creo que estemos excesivamente pagos. Tanto no lo creo, que en el año 1943 los diputados nacionales percibíamos 1.500 pesos y los generales igual suma. Ahora éstos nos han dejado a la mitad del camino. Ya están en los treinta mil.

¿Qué autoridad tendremos para imponer una reducción en el presupuesto de las fuerzas armadas si no empezamos nosotros por darles el ejemplo? Nadie ignora que el presupuesto militar devora la economía de la Nación. Adquiramos autoridad moral y luego procedamos a hacerle una poda que sea efectiva y real.

Mi intención es que todos compartamos las angustias de la clase media y la trabajadora. Que no sean ellos solos los que soporten el peso de esta recuperación. Sufren ellos; más nosotros que ellos. Ese es mi espíritu de decencia para quienes me han dado un mandato que cumplir.

Sr. Solanas. — El señor diputado me recuerda la opinión de un cirujano que trataba a un renco: para igualarlo y para evitar que renqueara, resolvió cortarle la pierna más larga. (Risas.) El señor diputado quiere condenar a todos a la necesidad.

Sr. Rodríguez Araya. — Es la cojera del perro, señor diputado. (Risas.) Ya no sabemos cuál es la pierna sana, así que da lo mismo. (Risas.)

En el segundo agregado propongo que no se dé indemnización y asimismo se den por concluidas las funciones a los militares en retiro con puestos en la administración pública. Caerá mal, pero no importa. Es lo justo.

Este es un problema serio. Debía debatirse con gran profundidad. Debe preocuparnos el éxodo de la gente joven de las filas del ejército por las perspectivas que le brinda adoptar tal decisión. Pobre el civil que abandona, a esa edad, un puesto público. No le dan ni para el

tranvía. En las filas de las fuerzas armadas ocurre lo contrario. Es esta democracia nuestra que vive un poco uniformada.

No sé si ignoran los señores legisladores que miembros de las fuerzas armadas que se retiran a los treinta y tres, treinta y cuatro o treinta y cinco años, inmediatamente ocupan un puesto en la administración pública. Van directamente a dos sueldos. Toda esa gente tiene que desaparecer, y los primeros deben ser aquellos que desempeñan más de un puesto en la administración, para de esta manera brindar ubicación a aquellos otros que no disponen de otro medio de vida que un puesto. En las mismas condiciones coloco a los jubilados que han percibido el aumento del 82 por ciento. No una proporción menor, pues sería condenarlos al hambre.

Por último, entiendo que se deben reducir los aguinaldos, porque no se pueden aceptar las extraordinarias diferencias que hay entre un humilde trabajador y un director de banco, un general y hombres que ocupan altas funciones en la vida del país.

Yo señalo a los señores diputados que vamos mal. Este plan de austeridad que predica el gobierno, solamente hace que las clases media y trabajadora tengan que luchar por la recuperación económica de la República.

Me he expresado de esta manera con un espíritu de colaboración, entendiendo que debo exponer ante la Cámara cuáles son mis ideas y mis propósitos sobre la forma como se debe conducir el gobierno.

Es indudable que la economía del país está absolutamente resentida, y de ello no le cabe la responsabilidad al gobierno del doctor Frondizi, porque ya viene de arrastre; pero por lo menos en las medidas a arbitrarse tratemos de que la recuperación económica de la República la realicen los que hicieron la sangría, los ladrones públicos, que están todos fuera de las cárceles argentinas.

Evidentemente este asunto es muy difícil. Si hubiéramos hecho una poda al presupuesto militar nos hubiéramos ahorrado muchas dificultades en estas circunstancias.

Yo estoy por un plan de austeridad, por un plan de decencia, que invierta de una vez por todas los términos de la filosofía política y que se expulse de los partidos a los que quieren negociar con las bancas y con los puestos públicos. Esa será la única manera, porque si no hay recuperación moral no podremos llegar a feliz término.

Esto es lo único que quería decir, y si en algo he molestado u ofendido a algún señor diputado, no ha estado en mi ánimo el hacerlo y pido mil disculpas.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez Machado. — Señor presidente: el artículo que está a nuestra consideración es la

consecuencia de un viejo proceso político en el país, que ha convertido en muchos aspectos la función pública como la retribución del servicio personal y partidista. Por nuestra parte afirmamos que este gobierno ha superado ese tipo de acción.

Entendemos que en este proceso el artículo establece precisamente los métodos para racionalizar el funcionamiento de la administración, y advertimos que en él se encuentra perfectamente previsto el caso particular a que se refiere el señor diputado Rodríguez Araya con respecto a la incompatibilidad en los casos del ejercicio de más de una función pública, y en los casos del ejercicio de ésta por quienes se encuentran en condiciones de retirarse o jubilarse.

Yo sé que en este proceso de racionalización a lo mejor habría que adoptar las medidas que propugna el señor diputado por Santa Fe. Creo sí que habría que disminuir algunos sueldos; pero no sé si exclusivamente es ésta la mejor manera de establecer una función eficaz. Esto en líneas generales.

El proyecto dispone cómo se hará esa racionalización. No se trata tanto de disminuir los haberes o dejar de percibir lo que es una conquista social como de evitar la duplicidad de funciones en la administración pública o la falta de ejercicio por parte de funcionarios que no cumplen su tarea, porque cuando excesivo es el número de funcionarios, lógicamente la función no está funcionalmente bien cumplida.

Pero quiero referirme ahora a lo que ha manifestado el señor diputado por Santa Fe con respecto a las dietas. El señor diputado sabe que no me molesta que él hable de las dietas asignadas a los miembros de esta Cámara. Afirmando que la retribución que se percibe apenas alcanza para que los hombres del interior especialmente puedan venir a esta Cámara a cumplir su función específica. Pregunto lealmente al señor diputado por Santa Fe si cree que aquí podría haber diputados obreros, por ejemplo, que han tenido que dejar sus hogares y su trabajo, o aquellos que ejercen profesiones liberales y que se han visto precisados a cerrar sus consultorios o a desatender sus estudios, si la función fuere gratuita o exiguamente retribuida.

El Parlamento argentino tiene que dar la posibilidad a los hombres de cualquier condición social o de cualquier condición económica de ejercer una función pública, y eso no se hace sino asegurando una retribución mínima que permita una vida decorosa.

Yo afirmo que la cifra que percibimos como dieta apenas alcanza para cubrir un presupuesto familiar de quien tiene que mantenerse aquí y sostener su familia afuera. Yo pregunto al señor diputado por Santa Fe si él no piensa que una consecuencia de lo que ha propuesto no sería la de que a estas bancas podrían llegar so-

lamente aquellos que pueden donar sus sueldos. Hago esta argumentación entendiendo que se va a cumplir con el sentido republicano de la función solamente si la dieta es compensatoria del esfuerzo y dedicación del legislador; pero debo decir también con absoluta lealtad al señor diputado por Santa Fe, de igual a igual y con la sinceridad que me caracteriza y que el señor diputado conoce, que yo personalmente —sin querer rozar a ninguno de mis colegas, porque todos están en la misma situación— acepto que renunciemos él y yo a la diferencia de las dietas, de 10.000 a 17.500 pesos, y que la renuncia beneficie al erario público.

Esto lo hago sabiendo perfectamente, como lo sabe el señor diputado por Santa Fe, que cada uno de los miembros de esta Cámara es un hombre de trabajo; pero como presidente del bloque de la mayoría no podía permitir que quedara en el ambiente la impresión —demagógicamente sugerida— de que la bancada de la mayoría se negaba a la reducción de las dietas. Conocen los señores diputados de la minoría que el emolumento que perciben los diputados apenas alcanza para cubrir las necesidades que tienen en la función pública y en sus hogares en provincia. Pero, para tener plena autoridad en mis afirmaciones, acepto el desafío del señor diputado Rodríguez Araya y desde ahora pongo a disposición de la Tesorería la diferencia entre los 10.000 y los 17.500 pesos.

Sr. Rodríguez Araya. — Acepto, señor presidente.

— Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos, don Juan Raúl López.

Sr. Presidente (López). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — La Honorable Cámara ha considerado con amplitud el problema que plantea la sanción del artículo 13 que se propone agregar a este proyecto de ley.

Valoro el gran esfuerzo que los señores diputados del sector de la mayoría han tratado de hacer para justificar una cláusula de esta índole, que tiene vicios de nulidad constitucional manifiestos.

Es evidente que todos los sectores del país consideran que el problema de la burocracia, que tiene caracteres de verdadero flagelo social, debe ser resuelto a fin de que no se constituya en una succión en la economía del país. Reconozco con lealtad que debe combatirse la burocracia, así como debe lograrse la racionalización administrativa. Pero es preciso señalar que racionalización administrativa no puede ni debe importar necesariamente cesantía en masa de empleados públicos.

Nosotros queremos destacar, y éste es el motivo determinante de mi intervención en el de-

bate, que el artículo propuesto hoy por el señor diputado Prece en substitución del que proyectara anteriormente, a pesar de todo su empeño por justificarlo, no mejora la situación, sino que la empeora, pues por vía de este artículo nuevo se llega a legalizar hasta la suspensión de una garantía constitucional. Es decir que el artículo nuevo es mucho más grave que el que determinó la reacción del sector minoritario en la sesión del 22 de diciembre, y evidentemente de muchos legisladores del bloque de la mayoría.

Existen en esta cuestión dos aspectos fundamentales: el constitucional y el económico-financiero.

En cuanto al aspecto constitucional, debo advertir que el artículo 14 nuevo de la Constitución establece dos garantías que resultan vulneradas por la disposición que consideramos: en primer lugar, «la protección contra el despido arbitrario», y en segundo lugar, «la estabilidad del empleado público».

En este caso, todas las razones que se puedan alegar no justifican en forma alguna la violación de ese precepto constitucional. Por eso esta ley, con el artículo que se proyecta incluir, está viciada de nulidad en forma absoluta y presenta defectos fundamentales en su contenido institucional. Estoy seguro de que un tribunal de justicia declarará inconstitucional esta norma en cuanto se promueva el recurso correspondiente.

Existe jurisprudencia reiterada en la materia, y los señores diputados de la mayoría tienen que comprender que el artículo 14 nuevo ha constitucionalizado el principio de la estabilidad, al cual es preciso someterse y subordinarse. En «La Ley» del viernes 24 de octubre de 1958, figura el siguiente fallo: «Es nula la resolución del presidente de la Comisión Nacional de la Energía Atómica que dispuso una cesantía sin que hubiera dictamen de la junta de disciplina, conforme a lo previsto en el artículo 44 del estatuto del personal civil. A consecuencia de la nulidad de la resolución de cesantía por violación de la garantía que representa la intervención y dictamen de la junta de disciplina, corresponde disponer la reincorporación del ex agente en los términos del artículo 26 del citado estatuto.»

Es decir que esta norma con su nueva redacción viola ese estatuto, y también, como deberá declararlo la justicia necesariamente, el artículo 14 nuevo de la Constitución. No funcionarán para nada los tribunales de disciplina ni se ejercerá el derecho de defensa ni se dan normas para garantía de todos los empleados.

Hago esta afirmación porque precisamente Bielsa, citado por el diputado Parodi Grimaux en su habilidosa defensa, establece como presupuesto de la función pública la defensa de la estabilidad. Ratifica ese concepto, y señalo que Sarria, en su obra de derecho administrativo, destaca que dentro de los principios básicos que

rigen el estatuto de los funcionarios debe destacarse «la relación contractual, contrato de derecho público, y que el derecho a la estabilidad es inherente a la relación contractual». Esos son principios que no se van a poder eludir.

Además, este aspecto constitucional es una garantía que no se puede suspender por ley alguna. Existe un precepto que debe respetarse, y el deber del Estado es encontrar soluciones a este problema.

Con respecto a la económica debo reconocer que el señor diputado Liceaga ha ubicado el problema en el aspecto, diríamos, troncal de la situación. Evidentemente, ese problema se vincula a la influencia de los gastos públicos y se vincula, ha dicho, «a un plan integral de estabilización». Esa es la medula de este problema, y esa medula, determinada con precisión, lo reconozco honradamente, es la que impone la necesidad de que se observen nuestros planteos.

Ahí está el grave error de este artículo. No se puede tratar sólo uno de los aspectos que hacen a un plan de estabilización económica. Esa es nuestra posición. Esto hace al todo económico del país, a ese plan de estabilización que se está ejecutando sin que el Congreso lo haya tratado. Es evidente que se vincula al aspecto económico, a la influencia de los gastos públicos, a la valorización de la moneda, al régimen cambiario, a la situación del presupuesto.

¿Cómo podemos entrar a considerar un artículo que hace a un aspecto del plan sin tratar todo el plan y sin considerar la ley de presupuesto? Ahí está la médula de este problema. Significaría que frente a un proceso económico integral vamos a tratar solamente uno de los aspectos parciales.

Coincido con el diputado Heredia en que «no se debe cortar el hilo por lo más delgado». No creo que se hará un plan de estabilización a base de cesantías, de miseria y de desocupación; absolutamente no. El efecto será contraproducente. Por eso es que este asunto no puede considerarse en forma parcial; tiene que irse al plan integral que debe tratar este Congreso. Por eso es que tanto las iniciativas del diputado Rodríguez Araya como todas las que se han hecho deben ajustarse y estudiarse en un plan integral.

Personalmente creo —corresponde a mi lealtad decirlo— que el legislador debe tener la remuneración que defienda su propio desenvolvimiento económico; lo afirmo con toda claridad. Pero también afirmo que en un bien estudiado plan económico integral —estoy seguro, porque confío en el patriotismo de todos— cada uno dará una cuota de sacrificio para hacer lo que necesita el país en un verdadero plan económico de seguridad ejecutado y resuelto con el sacrificio común.

Anticipo que mi partido está dedicado en estos instantes al estudio y preparación de un

plan económico integral que expondrá al país fijando sus puntos de vista y sus medidas frente a esta situación.

Creo, sí, que deben contemplarse todas las economías posibles en la administración pública, pero no creo que pueda lograrse con sanciones que, inclusive en lo que hace a los jubilados, habrá que computar y estudiar; habrá que hacer los cálculos actuariales de lo que esto va a significar como repercusión en las cajas de jubilaciones.

Es que un plan económico de esta trascendencia tiene que ser estudiado en su totalidad. Estoy seguro de que, desde el presidente de la República para abajo, todos darán su contribución al esfuerzo nacional, con fe nacional, y no porque así lo pretenda el Fondo Monetario Internacional.

Creo, sí, que es necesario que se considere todo lo que puede hacerse. La reducción del servicio militar puede ser una medida importante. Yo no estoy entre los hombres que creen que hay que menoscabar a las fuerzas armadas de la Nación. Creo, en cambio, que constituyen valores morales en la vida nacional, pero creo también que deberían adoptarse medidas, siempre que no lleguen a afectar a la defensa nacional.

Insisto en que todo esto debe ser materia de estudio de un plan general, para que cada uno dé su cuota de participación, de la que no estarán exceptuados —tenga la seguridad el señor diputado Rodríguez Araya— ni el Parlamento, ni el Poder Ejecutivo, ni nadie. Pero esto debe hacerse en la forma que corresponde, no estudiando tan sólo un aspecto del plan económico, mientras el Parlamento desconoce la totalidad de un plan que no ha considerado.

De este debate surge evidente una cosa: los señores diputados quieren que no haya cesantías; es su inquietud. Pero surge de sus palabras «que habrá cesantías», y que las habrá violando normas constitucionales. Se producirá inquietud en el sector del trabajo argentino.

Se podría establecer que no se designará a ningún funcionario en cargo vacante; que corresponde la disminución de los sueldos altos; que puede hacerse una racionalización de gastos superfluos. Pero debe hacerse por medio de un plan económico general. El gobierno ha perdido mucho tiempo, en los últimos años, a este respecto. Al actual gobierno no le asigno la responsabilidad, porque sería injusto, de hechos en los que no ha intervenido. Pero es evidente que en ocho meses el actual gobierno multiplicó los problemas y acrecentó la crisis económica.

Pueden, inclusive, establecerse sueldos máximos y mínimos; claro está que mediante un plan integral de estabilización.

El artículo proyectado por el señor diputado Prece no aclara ni mejora el texto anterior; por

el contrario, lo agrava. Tiene las características de la indeterminación y de las imprecisiones. Le deja al Poder Ejecutivo facultades discrecionales, lo que es absolutamente inconstitucional.

Reconozco que el señor diputado Prece nos ha facilitado el artículo por él propuesto dos o tres horas antes de este debate, no repitiéndose en este caso lo acaecido en el debate anterior, que fue sorpresivo y clandestino.

Esto no es una reglamentación del artículo 14 de la Constitución; es su anulación, y es más, señor presidente: es la suspensión de la Constitución. En la parte final el proyectado artículo dice: «Las normas del presente artículo tendrán aplicación hasta el 31 de octubre de 1960, quedando en suspenso durante dicho lapso cualquier disposición legal que se le oponga.» Es decir, suspende la Constitución. Y una ley no puede suspender la Constitución. Están suspendidas las garantías constitucionales por el estado de sitio. Ahora, por esta ley, suspendemos la estabilidad del empleado público. Puede otra ley suspender el derecho de propiedad, y por otras leyes puede seguir haciéndose una Constitución paralela, clandestina, al margen de la verdadera Constitución. Esto no puede hacerse en manera alguna.

Por este artículo, aparte de la discrecionalidad de las facultades que se otorgan al Poder Ejecutivo, aparte de que se posibilitan y facilitan las cesantías en masa, podrá el Poder Ejecutivo dejar cesantes a cincuenta mil, cien mil, doscientos mil empleados, si lo quiere. No hay ninguna limitación.

Es mucho más grave este texto que el anterior. Además, dice cuál ha de ser el régimen en materia de indemnización. Esta es la antítesis de la estabilidad. En virtud de esta disposición no se aplica la ley 11.729 y se anula el régimen que el Estado impone al derecho laboral privado. ¿Con qué derecho el gobierno puede exigir a las empresas privadas el cumplimiento de la ley 11.729? ¿Cómo va a exigir que se aumente la indemnización y prospere la última reforma a la ley 11.729, propuesta por el señor diputado Bogliano? Advirtamos que el Estado no cumple con esa ley y que ni siquiera abonará al contado la indemnización propuesta, la que será equivalente a tres meses de sueldo y se abonará en cuotas mensuales. Desde el punto de vista laboral, para un empleado que ha trabajado durante toda su vida, es la negación del derecho de antigüedad, que constituye una especie de seguro de garantía obtenido por su dedicación al trabajo.

Sr. González. — ¿Me permite una aclaración el señor diputado por Entre Ríos?

Sr. Perette. — Sí, señor diputado.

Sr. González. — Quiero señalarle que, por este régimen indemnizatorio, los empleados que sean declarados cesantes percibirán una indem-

nización muy superior a la que establece la ley 11.729 vigente, la que tiene un tope de mil pesos por año de antigüedad.

Sr. Perette. — Señor presidente: la ley 11.729 concede indemnización en base al tiempo de antigüedad y con relación a los años de servicios prestados. En esta disposición que consideramos se establece que dicha indemnización no será inferior a tres meses de sueldo...

Sr. González. — En proporción a la antigüedad.

Sr. Perette. — Pero son tres meses de sueldo.

Sr. González. — No, señor diputado. Aun cuando por la antigüedad no le corresponda, se le abonarán como mínimo tres meses.

Sr. Perette. — En el peor de los casos debió establecerse en esta ley que si se produjera la separación de un empleado —y entro en esta hipótesis por vía de discusión—, la indemnización se pagará en forma total y no en cuotas mensuales.

Sr. González. — Pero son superiores.

Sr. Perette. — Pero se trata de cuotas mensuales y no como lo dispone la ley 11.729, que se refiere al pago total al contado.

Entiendo que se producirán cesantías, violando el régimen constitucional. Esta cláusula es mucho más grave, y no podemos aprobarla sin disponer del estudio de un plan integral.

Sr. González. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Perette. — Sí, señor diputado.

Sr. González. — Señor presidente: el señor diputado Perette hace la afirmación terminante de que toda cesantía implicaría la violación de la garantía constitucional del artículo 14 nuevo. No veo de qué manera el inconveniente podría eliminarse a través del plan que el señor diputado reclama, dado que el planteo seguiría subsistiendo.

Sr. Perette. — Señor presidente: he partido de la base de que la solución económica no debemos encontrarla apelando a la desocupación y a las cesantías. El estudio integral debe relacionarse con toda la situación económica y financiera del país. De lo contrario se confirmaría la paradoja de que este Parlamento no considera un plan que cambia el valor de la moneda con relación a las divisas extranjeras; no considera el régimen de contratación de empréstitos, que establece fórmulas sobre concertación de arreglos de deudas; no dispone del plan necesario relacionado con la importación y la exportación, lo que cambia la estructura económica del país.

Sr. González. — Hemos tratado la reforma impositiva, que confiere facultades para regular las importaciones y exportaciones.

Sr. Perette. — Un plan económico tiene que llegar a este Parlamento en forma integral, basado en un análisis consciente y responsable.

No he querido realizar alusiones políticas, ni le asigno a esta proposición intención de ese carácter, es decir, de producir cien mil bajas

para sustituirlas por otras designaciones, ya que sería un hecho imperdonable del gobierno.

Entiendo que este artículo tiene que ser rechazado o, por lo menos —ésta es mi proposición—, tiene que volver a comisión para que juntamente con la iniciativa del diputado Rodríguez Araya, se haga un replanteo integral de cuanto deba realizarse en materia de burocracia y de administración pública.

Esa ha sido la razón de nuestra actitud con respecto al quórum. No hemos de contribuir en manera alguna a la adopción de esta medida, que consideramos de suma gravedad. Deseamos que los propósitos del Poder Ejecutivo sobre estabilización se cumplan, pero tenemos nuestras profundas dudas sobre esos resultados.

He leído un libro magnífico, *Antes que el tiempo muera*, de que es autor el destacado escritor José Blanco Amor, autor de *Más allá de la crónica* del diario «La Nación» y prestigioso periodista muy vinculado a nuestra vida parlamentaria. En esa enjundiosa obra, que merece ser leída, se hace un profundo análisis de la vida argentina, de un pueblo en defensa de su libertad, y se exaltan los altos fines de la especie humana.

Se refiere esta obra a los «momentos próximos a la aurora». Afirmando, glosando esos conceptos de Blanco Amor, que este proyecto no implicará la proximidad de una aurora de esperanza, sino que representará un vaticinio de incertidumbre y de angustia para miles de servidores públicos del país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (López). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Oreja. — Apelo a los antecedentes de la sobriedad verbal con que he actuado en el período parlamentario transcurrido, a fin de solicitar de los señores diputados la indulgencia necesaria para que se me excuse si a esta altura del debate y después de dicho todo lo que se ha expresado esta noche vengo en cierta forma a reabrirlo en un aspecto suficientemente considerado.

Un imperativo de conciencia hace necesario que deje sentada mi opinión respecto de la proposición formulada por el diputado Rodríguez Araya relacionada con la disminución de la dieta que perciben los legisladores nacionales.

En primer término señalo el hecho de que una proposición que tenemos en cierto modo derecho de considerar como efectista y dirigida a provocar intencionados comentarios en los diarios —que, en su mayoría, no son afectos al gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente— ha sido formulada por su autor en momentos en que se encontraban casi totalmente ausentes del recinto los componentes del bloque de su partido. De manera que no sabemos si en el momento de votarse esa proposición, la ausencia de los diputados de su sector podría

haber o no influido en el resultado que tuvo la proposición del señor diputado por Santa Fe.

Sr. Perette. — No puede hacer esa interpretación; no concurríamos porque no queríamos formarles quórum.

Sr. Oreja. — Con un sentido republicano de la vida política, entendemos que el concepto de la austeridad no ha de traducirse precisamente en los aspectos de reducción de una dieta, sino en cuanto a exigencias de cumplimiento estricto del deber que tenemos impuesto como representantes del pueblo.

En tal sentido estimo que la porción de pueblo argentino que con su voto me invistió de la facultad de ocupar esta banca puede y debe exigirme el cumplimiento estricto de mi deber, pero en manera alguna imponerme privaciones en mi obligada vida en la Capital Federal, haciendo que la misma sea llevada sin el decoro indispensable en razón de las exigencias que imponen las razones económicas propias de las actuales circunstancias de la vida del país.

Por otra parte, nadie ignora que el monto de las remuneraciones que tenemos asignadas los diputados como dieta y gastos de representación no ha sido votado por nosotros, sino que resulta de un decreto del gobierno anterior.

Es inexacto —y hay que decirlo, porque los comentarios públicos se están haciendo eco de un rumor infundado— que se haya votado hasta este momento aumento alguno de dietas, como lo es asimismo que los legisladores hayamos percibido aguinaldo de ningún género, porque no corresponde.

Sr. Rodríguez Araya. — Los diputados de Mendoza recibieron aguinaldo.

Sr. Perette. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Oreja. — Sí, señor diputado.

Sr. Perette. — Celebro poder confirmar lo que acaba de decir el señor diputado por Río Negro, y deseo dejar constancia de que no ha existido ninguna conversación ni hay coincidencia entre los sectores de la mayoría y de la minoría para disponer aumento en las dietas legislativas.

Para desvirtuar cualquier información equivocada, destaco que no existe ninguna clase de conversaciones ni podría haber ninguna coincidencia en el sentido de aumentar las dietas.

Sr. Presidente (López). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Oreja. — El diputado que habla es hombre de trabajo. Entiendo, con un concepto amplio, sin deformaciones ni discriminaciones que no corresponden hacer a un hombre democrático, que trabajador no es sólo el hombre que se dedica a una actividad manual.

Además, soy uno de los ciudadanos traídos a este recinto por el voto de la mayoría y representante de la Unión Cívica Radical Intransigente, y en el momento de hacerme cargo de mis funciones de diputado debí abandonar la

ocupación con la cual atendía mi subsistencia y la de mi familia, sin tener ningún otro ingreso ni renta que me permitan hacer frente a las necesidades elementales de la vida.

Por no querer tener el mal gusto de traer las minucias de un presupuesto doméstico, no hago la reflexión que corresponde sobre los gastos de hotel y alojamiento en la Capital Federal de los hombres del interior, ni sobre los gastos de mantenimiento de nuestros hogares en las provincias de origen, ni tampoco de las contribuciones que por disposición estatutaria de nuestro partido debemos hacer al comité nacional y al comité de distrito, así como de otros gastos emergentes de los compromisos que corresponden a nuestra condición de legisladores.

Liquidadas por todos esos conceptos las sumas que mensualmente tenemos que oblar, ningún diputado que carezca de otros ingresos o rentas puede hacer milagros para llevar una vida que no corresponda a la austeridad que nos impone nuestra condición de legisladores de un partido democrático.

Por consiguiente, sin falso pudor de ninguna naturaleza y sin temor a lo que pueda decir alguna prensa en el sentido de que hay diputados de la mayoría que no aceptan la reducción de sus dietas, sostengo valientemente que no sólo no podríamos reducirlas, sino que incluso tenemos que hacer el sacrificio de no aumentarlas para continuar llevando decorosamente la vida que nos hemos impuesto, al servicio de una causa de auténtica concepción revolucionaria, que no se sirve con actitudes efectistas, sino con una conducta permanente en la lucha por nuestros ideales.

He querido hacer las reflexiones expuestas, que interpretan los sentimientos y la realidad que afrontamos los diputados del interior de la República, para que quede concretamente expresada nuestra opinión de que no descendemos al terreno de compulsas de tipo materialista, sino que servimos la causa de nuestra propia dignidad, tal como corresponde a los representantes del pueblo libremente elegidos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (López). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Monte. — Seré muy breve, señor presidente.

Si fuesen ciertas las expresiones de los señores representantes de la minoría, a los diputados radicales intransigentes nos estaría depurado un irónico y triste destino, del que abominaríamos nosotros mismos, como también lo harían nuestros hijos y el pueblo argentino todo.

Adviértase que mujeres y hombres, jóvenes y maduros, integrantes de esta bancada, han entregado lo mejor de su existencia para luchar por la causa del pueblo argentino. Aquí se sientan muchos hombres que han defendido a trabajadores. Celebro la preocupación de la ban-

cada minoritaria por la defensa de empleados y obreros de la administración pública. Eso revela que algo han aprendido a través de estos últimos años.

Podría decir, y esto no se interprete como una jactancia, que he defendido a más hombres de trabajo que todos los señores diputados de la minoría juntos.

Sr. Silveira Márquez. — Está equivocado el señor diputado. Esa es una jactancia.

Sr. Monte. — Lo puedo probar con solo verificar las actas donde constan mis intervenciones en el Ministerio de Trabajo y Previsión y en el Departamento Provincial del Trabajo de Córdoba.

Como decía recién, de ser ciertas las expresiones de los señores diputados de la minoría, nos habríamos convertido ahora, en función de gobierno, en verdugos de quienes nosotros hemos defendido permanentemente y que son los hombres de trabajo del pueblo argentino.

Quiero recordar, porque hace al caso traer algunos ejemplos, que organizaciones sindicales, en momentos difíciles para sus asociados, han permitido el desplazamiento de la mano de obra de una empresa a otra y han aceptado indemnizaciones especiales.

Al gobierno nacional le interesa hacer economías, le interesa estabilizar la economía del país y racionalizar la administración pública.

Cuando se produzcan desplazamientos de empleados públicos será porque los puede absorber la industria privada. Eso es lo importante para llevar tranquilidad al sector de la administración pública.

Quiero recordar que la Unión Obrera Metalúrgica ha permitido el desplazamiento de trabajadores con indemnizaciones especiales; que la Asociación de Trabajadores del Estado y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor han permitido el despido de trabajadores del IAME para ser absorbidos por la empresa Kaiser Argentina y por la empresa Fiat Somoca Concord. De modo que la actitud del gobierno tiene precedentes, y muy valederos, precisamente en hechos y en situaciones en los que han sido protagonistas organizaciones sindicales.

En cuanto a las fuerzas armadas, quiero citar un solo hecho que revela que se austerizan por sí mismas. Una medida adoptada por el Ministerio de Aeronáutica ha suspendido el viaje de comisiones al exterior a efectos de hacer economías en el presupuesto de ese Ministerio.

Quiero recordar también a los legisladores de la minoría que en materia de ascensos, este año, por ejemplo, en el caso de generales de brigada, han ascendido solamente cuatro al grado de general de división. Quiero pedirles que analicen si en los años anteriores se han producido hechos como éste. Lo mismo ocurre en el caso de los coroneles: sólo son trece los que han ascen-

dido a generales, cuando en años anteriores eran cientos de militares de alta graduación los ascendidos. En esta apretada y quizá deshilvanada síntesis he querido fijar mi pensamiento para decir que estoy de acuerdo con la proposición del señor diputado Prece, y que sin ninguna clase de hesitación ni de preocupaciones en el fuero de mi conciencia le daré mi voto favorable creyendo que en esa forma se sirven los intereses del pueblo y especialmente los de la clase trabajadora.

Sr. Presidente (López). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. De la Vega. — Dos distinguidos economistas, preocupados hondamente con el problema de los empleados públicos, llegaron a dar una solución a este gravísimo acontecimiento económico-social argentino.

Tal solución resultaba, a la vista de los informes y de los cálculos, de la misma ingeniosidad que la del huevo de Colón. Si el gobierno actual decide cerrar herméticamente el registro de empleados públicos durante veintiocho meses, este problema crítico actual se transformaría en una solución que parece maravillosa.

Y si se tiene en cuenta que por circunstancias electorales tan extraordinarias como las que ocurrieron el 23 de febrero, el partido gobernante tiene en sus manos todo el mecanismo y todas las palancas del país, desde Buenos Aires hasta La Quiaca y Tierra del Fuego, en todas las provincias y en casi todas sus municipalidades —acontecer político que probablemente no se ha de repetir—, el profundo análisis económico y el cuidadoso cálculo realizado por estos economistas me permiten entregarles a ustedes, a esa mayoría, la probable solución del grave problema del exceso de empleados públicos.

Se trataría, en esta forma, de levantar una bandera de moral pública y de dejar un ejemplo permanente al dar una noble solución que traería como único inconveniente el que los compromisos electorales del partido gobernante quedarán detenidos por veintiocho meses. En tanto, el gobierno no tomaría sobre sus espaldas la grave responsabilidad que comporta este artículo que quiere introducirse en una ley para dramatizarla, para provocar una conmoción pública que ya está en marcha y para tener en vilo al empleado público hasta que le llegue el turno de su fusilamiento administrativo, resuelto por una pluma que pone el «cúmplase» a su cesantía.

Eso es lo que traigo como un aporte en esta hora de madrugada, para decirles que tal artículo no debe ser introducido en esta ley porque significa una conmoción social argentina.

Como recordó con tanta precisión el señor diputado Perette, hay un artículo constitucional, el 14, que dice en forma definitiva y categórica que vamos a proteger el trabajo en todas sus manifestaciones y modalidades, para que no se realice jamás en este país el despido arbitrario

y para que el empleado tenga estabilidad y permanencia en la administración pública.

En la Constitución Nacional nos encontramos con algo extraordinario que he descubierto yo: la presencia de un personaje permanente, perenne, intocable, el empleado público. El es el único personaje perenne de la Constitución, que tiene una duración biológica como su propia vida y su propia capacidad. En esa Constitución terminan los presidentes, los vicepresidentes, los ministros, diputados y senadores, en términos fijos, por imperio de sus disposiciones; pero pervive en permanencia un personaje, que es el único que interesa e importa en esta hora a la Honorable Cámara: el empleado público. Ustedes no lo pueden tocar, ni autoridad alguna lo puede tocar, porque está investido y revestido de una autenticidad constitucional marcada en el artículo 14.

Sr. González. — La Constituyente que sancionó ese artículo estuvo integrada por representantes de partidos políticos que acababan de poblar la administración pública con millares de personas, y también de echar gente a millares.

Sr. De la Vega. — Eso es verdad, pero ninguno de los señores diputados podrá negar que desde todas las tribunas públicas se prometió al pueblo que la primera medida a tomar desde el gobierno sería el mantenimiento de la estabilidad del empleado público. Desde hace cuarenta años todos los partidos políticos argentinos están prometiendo lo mismo.

Sr. Solanas. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. De la Vega. — Sí, señor diputado.

Sr. Solanas. — Es necesario esclarecer el sentido de esa promesa que el señor diputado De la Vega ha recordado y que el diputado que habla, en muchas oportunidades, planteó desde la tribuna política.

Esa promesa significaba que no tomaríamos represalias desde el gobierno por razones políticas, tal como estaba acostumbrado el país a sufrir en los sucesivos gobiernos conservadores, en que la función pública se ponía al servicio del comité; y cuando el caudillo se transformaba en funcionario y llevaba a sus electores a los puestos rentados de la función pública, echando a los de los otros partidos. La función pública se reducía simplemente a sacar una tribu de una posición de hegemonía, para reemplazarla por otra.

Cuando los hombres de la Intransigencia dijimos al país que este gobierno no haría cesantías, expresamos que nadie sería perseguido por sus ideas políticas. Y eso, en ocho meses de gobierno lo cumplimos al pie de la letra. Y lo que decimos esta noche es que no es posible que sobre los hombres que trabajan esté la carga de funciones innecesarias. Queremos hacer la reorganización de la economía argentina; quere-

mos que la mano de obra argentina se emplee en tareas productoras de riqueza. No queremos que haya hombres que trabajen al servicio de clases adineradas para brindarles placeres y comodidades.

Es necesario que cada una de esas funciones que quede sin sentido de tal, sea aplicada en forma creadora a colaborar en el bienestar nacional. Ese es el sentido de la promesa que nosotros hemos formulado y cumplido con fidelidad, porque en ella iba implícito, además de respetar al funcionario público, el compromiso sagrado de poner por encima de todos los intereses políticos adquiridos, el interés de la patria.

Sr. Presidente (López). — La Presidencia advierte a los señores diputados que, como se está discutiendo en particular, los oradores disponen de quince minutos; de manera que las interrupciones deben ser breves.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. De la Vega. — Es indudable que los hechos biológicos y también los personales son irreversibles. Y no podemos negar que el hombre que ha llegado a la función pública por los mil vericuetos que existen —que no son siempre los del padrinazgo y la acción política solamente— se habitúa a una profesión y a una materia que constituyen también una especialidad. Nosotros hemos visto de cerca el martirio y la tragedia del empleado para mantener su cargo ante los cambios de gobierno a que se refería el señor diputado Solanas.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don Jorge Raúl Decavi.

Sr. De la Vega. — No podemos engañarnos. Hace cuarenta años que estamos leyendo en las plataformas de todos los partidos políticos argentinos la misma leyenda: la inamovilidad de los empleados públicos. Y hace cuarenta años que vemos, cualquiera haya sido la bandera del vencedor político, provocar inmediatamente el desbande de los ejércitos de la burocracia y poner en su lugar a los amigos que llenaban sus comités. Eso no podemos negarlo; somos hombres políticos. A nosotros en este caso nos toca una función casi de expectación.

Es verdad lo que me decía hace pocos días un distinguido diputado de la mayoría hablando sobre este aspecto del problema: en realidad, nosotros tenemos que enfrentarnos con una masa burocrática que no ha sido creada por la Unión Cívica Radical de ninguna de sus tendencias, porque es la masa forjada por los movimientos dictatoriales, por los movimientos fraudulentos, por las tiranías y las revoluciones que se sucedieron en el país desde 1930 hasta 1958. Y voy a decir quién era ese diputado: era el señor López Serrot, que hacía unos cálculos perfecta-

mente exactos sobre esa circunstancia, sobre el término de tiempo de que disponen esos hombres y esas mujeres que llenan la administración pública, y sobre las perspectivas y porvenir de todos ellos.

De modo que este problema es eminentemente social; la parte monetaria es la parte insensible, la que precisamente no vibra en esta hora, porque detrás de ese problema de conjunto y de masa hay un problema individual de ser humano, de ciudadano argentino, que tiene tras de sí un núcleo familiar al cual ninguno de nosotros puede ser insensible, sino que tenemos que echar nuestra mirada reflexiva de legisladores.

Ustedes con su voto pueden introducir ese drama en esta ley; pero sé que tendrán que reflexionar una y mil veces antes de hacerlo. Ya lo dije en rueda de amigos: éste es acaso uno de los planteos más trascendentales y uno de los problemas más graves —entiéndanlo bien, señores diputados— que hemos tenido que discutir en este recinto.

El personaje central, que es el empleado, espera angustiado. Algún día se ha de escribir en este país el libro que hable de la grandeza de los empleados públicos argentinos, mientras ahora por error se los quiere mostrar como una masa informe de la cual puede fácilmente prescindirse, cuando acaso constituyan la exacta rueda que va haciendo marchar en definitiva al país.

Nosotros tenemos que cambiar los métodos, los sistemas y las ideas; pero para cambiarlos yo les digo a los señores diputados de la mayoría: antes de aprobar este artículo, antes de introducirlo y dramatizar la ley, vuelvan a hacer los cálculos y sabrán que en realidad este problema se puede resolver haciendo ustedes el sacrificio partidario que impone la obligación de no nombrar un solo empleado en ninguna municipalidad, en ninguna provincia ni en la administración nacional durante los próximos veintiocho meses. Verán ustedes cómo por ese camino, que parece duro y difícil, adquirirán una significación y jerarquía que merecerán el respeto y la admiración del pueblo argentino. Esta es la verdadera forma para combatir en este caso noablemente los excesos de la burocracia.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Domingorena. — Señor presidente: las manifestaciones de los señores diputados del sector minoritario, algunas de las cuales han incursionado por el campo jurídico y otras han encarado el problema desde el punto de vista político, obligan a este sector a decir su palabra agregada a las brillantes exposiciones que han hecho algunos miembros de esta bancada mayoritaria.

Con atención he escuchado al señor diputado De la Vega, quien en tono dramático nos recordó que desde hace años vienen bregando todos los partidos políticos por el respeto de la es-

tabilidad del empleado público. No necesitaba el señor diputado por Santa Fe refrescarnos la memoria, porque ese concepto es carne dentro de la Unión Cívica Radical. Además, quiero manifestar al señor diputado que si bien a través de todos nuestros programas y plataformas hemos reconocido la estabilidad del empleado público, no es menos cierto que desde el año 1930 hasta esta fecha hemos recorrido el país señalando en todas las tribunas y en los libros que nos encontrábamos sumergidos por una pesada burocracia que hacía imposible la marcha del presupuesto nacional.

Sabe también el señor diputado —y creo que alguna vez lo ha de haber dicho— que desde el año 1930 el país está soportando un elevado número de empleados públicos. No es contra ellos que nosotros queremos hablar esta noche. Sabemos que, después de todo, el empleado público no es más que un ciudadano que ha buscado un destino en el presupuesto nacional para subvenir a sus necesidades. Los señores diputados de la minoría han de convenir conmigo que este enfoque de tipo sentimental no puede llevar a nuestro partido, que tiene la responsabilidad de la conducción, a desplazar definitivamente el problema afligente por el que atraviesa la economía de la República, debido a la crecida burocracia que soporta.

Sería mucho más fácil que el partido desde el poder hubiera abierto las compuertas para que sus correligionarios hubiesen llegado a los puestos del presupuesto; hubiera sido mucho más fácil y nosotros habríamos quedado bien con la legión de hombres que ayudaron a este partido con todo sacrificio, que venían luchando desde el año 1930, y que también tenían derecho a ocupar una posición dentro del presupuesto.

Hubiera sido mucho más fácil para nosotros que no se estableciese la congelación de los puestos y que hubiésemos aprovechado la hora de tender la mano fraterna para entregar el recurso que puede ofrecer el presupuesto nacional al hombre que lo estaba necesitando. Pero nuestro partido ha demostrado en ésta y en otras instancias su coraje para decir al país la verdad clara, aunque duela.

Tenemos conciencia de que se trata, por cierto, de una medida de tipo impopular en su primer impacto. No necesitamos que los señores diputados de la minoría nos digan que los empleados públicos pueden sospechar de esta medida y de nuestra actitud. Por encima del empleado público, y no obstante todo el cariño que le profesamos, está el porvenir de la República.

El presupuesto nacional no da abasto con la pesada carga que viene de arrastre y que asfixia al pueblo.

Esta es la hora definitiva en que un partido político en función de gobierno —y así tenía que ser— diga que «no» a sus correligionarios

y se decida a poner orden dentro de la burocracia. No es la culpa de los empleados públicos. ¡Qué ha de serlo! En este país donde no existen fuentes de trabajo, el refugio tiene que ser el presupuesto nacional; pero este partido está decidido a abrir otros campos de acción.

Hemos lanzado la República aceptando el desafío y hemos de aceptarlo una y mil veces, como lo ha dicho el propio señor presidente de la Nación. Crearemos nuevas fuentes de trabajo, industrializaremos el país, arrancaremos al hombre nuestro que se creyó capacitado nada más que para servir una función dentro del presupuesto y lo pondremos como una criatura perfectamente dotada para ganarse su sueldo y liberarse definitivamente de la dependencia respecto del Estado. Vamos a reencontrar al hombre nuestro y lo vamos a posibilitar en su función social, provocando no sólo el aminoramiento de la burocracia argentina sino creando fuentes de trabajo que le permitan, una vez alejado de la administración pública, ganar el pan para sus hijos.

Esa es la función de tipo integrativo en que estamos empeñados. Eso es lo que atañe a la parte emocional, señores diputados de la minoría, que nosotros la sentimos tanto como ustedes, porque como partido mayoritario y de gobierno sabemos la responsabilidad que esto importa.

Se han hecho aquí también algunas observaciones de tipo jurídico que es necesario desvirtuar, porque evidentemente se está confundiendo el campo de acción. Se ha hecho referencia a la indemnización de la ley 11.729 y se la ha querido asimilar a la situación de este artículo que considera la Honorable Cámara. Error garrafal de apreciación jurídica. El empleado público no está ligado a la administración por un contrato. Esto es el abecé del derecho administrativo. Por eso es que el empleado público cesante no tuvo nunca derecho a indemnización. Es otro tipo de régimen legal el que lo vincula al Estado. No estamos dentro de la esfera privada, ni civilista, ni laboral; estamos en otro terreno jurídico. Como bien lo señala Bielsa, y coinciden en ello todos los tratadistas de derecho administrativo, el empleado público se encuentra vinculado al Estado por otros lazos que no son precisamente los contractuales. Aquí el vínculo *iuri* es de protección legal y reglamentario, no contractual.

Sr. Perette. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Domingorena. — Con mucho gusto.

Sr. Perette. — Como el señor diputado por Entre Ríos se está refiriendo, aunque no lo ha dicho expresamente, a las manifestaciones que formulé acerca de la ley 11.729, quiero advertirle que no he incurrido en ninguna confusión entre los contratos de empleo público y de empleo privado, sino que he relacionado dicha

ley y los beneficios que consagra, con la situación que se provoca al empleado público que es despedido. De ninguna manera he confundido un asunto que evidentemente es el abecé del derecho administrativo, porque desde luego se trata de dos figuras jurídicas diametralmente distintas.

Sr. Domingorena.— Me place que el señor diputado Perette haya hecho esta aclaración, porque había quedado en el ambiente la impresión de que él pensaba que había una similitud entre el contrato laboral y el administrativo.

Sr. Perette.— De ninguna manera he señalado esa similitud.

Sr. Domingorena.— Ha dicho el señor diputado Perette que este artículo nuevo viola la Constitución Nacional, y para hacer esta afirmación ha expresado que se quiebra la norma preceptuada por el artículo 14 de la Carta Magna, en cuanto establece el principio de la estabilidad del empleado público.

Evidentemente el sector de la minoría no ha seguido de cerca el discurso pronunciado por nuestro compañero de bancada, diputado Parodi Grimaux, que en forma terminante, no creando una doctrina sino siguiendo la sustentada por profesores de derecho administrativo, ha demostrado cabalmente que cuando desaparece el empleo o la función pública, desaparece también el funcionario, porque es precisamente la función la que hace al funcionario, y no a la inversa.

Es claro que la Constitución consagra el principio de la estabilidad del empleado público, pero es necesario tener en cuenta que las normas no juegan en forma suelta, ni en nuestra Carta Fundamental ni en ningún otro código. Hay que armonizar los conceptos expresados en los distintos artículos de los cuerpos legales, porque de lo contrario yo me pregunto cómo podría ser que mientras por un lado hablamos de la estabilidad del empleado público, por otra disposición de la Constitución Nacional, por el artículo 86, inciso 10, se autoriza al Ejecutivo a nombrar y remover a todos los empleados y funcionarios de la administración nacional. Evidentemente hay que buscar el ensamblamiento de las normas.

Sr. Silveira Márquez.— No olvide el señor diputado que la facultad otorgada por la Carta Magna, a que se ha referido, está dentro de los derechos que corresponden al Poder Ejecutivo; pero la estabilidad del empleado público se encuentra en la parte general de los derechos, deberes y garantías, y esa parte general es la que gobierna todo el cuerpo de la Constitución.

Sr. Parodi Grimaux.— Pero es indudable también, señor diputado, que esa garantía, como

todas, está sujeta a la reglamentación que haga el Congreso.

Sr. Domingorena.— Voy a insistir sobre el concepto anterior. Es elemental que la norma constitucional que reconoce la estabilidad del empleado público tiene que ser conjugada y analizada a la luz de los antecedentes que nutren al derecho administrativo que rige este tipo de relaciones. Es así por la sencilla razón de que no podría la Constitución Nacional obligar al Estado argentino a mantener la estabilidad de todos sus empleados públicos si esa estabilidad llevara el país a la ruina.

Aquí hay causas que superan una mera cláusula constitucional que no juega en forma arbitraria y que no tiene un valor *erga omnes*. Hay causas determinantes para que esa estabilidad que sigue estampada en la Constitución y que sigue sostenida y respetada por nuestro gobierno, debe ser también conjugada con la realidad política argentina. Si el país está en crisis, si la economía argentina no da para mantener la burocracia de la República, la cláusula de la estabilidad juega pero en la medida en que el Estado pueda llevar la economía al presupuesto, cercenando aquellos cargos que no es necesario mantener en la administración, porque por encima del derecho del funcionario o del empleado está el derecho de la colectividad.

Voy a señalar con el tratadista Jèze cuáles son las causas determinantes de la ruptura de este tipo de relación entre el funcionario y el Estado. Señala Jèze que los casos de cesación de la función pueden ser clasificados en cuatro grupos. Primero, hecho material del impedimento (muerte); segundo, manifestación de voluntad del agente público; tercero, manifestación de voluntad de la administración pública; cuarto, expiración del término por el cual la función ha sido conferida.

Villegas Basavilbaso, sintetizando las cláusulas, señala: «Sin pretensión de establecer una clasificación sistemática de las causas extintivas de la relación de empleo o función que no presente observación a la crítica y en atención a las consideraciones precedentes es admisible, a mi juicio, la siguiente: primero, voluntad de la administración pública; segundo, voluntad del agente público; tercero, por hechos del agente público; cuarto, por la ley; quinto, por extinción de uno de los sujetos de la relación.»

En virtud de eso, establece en la página 579 de su tratado de *Derecho Administrativo*, tomo III, lo siguiente: «La ley, por motivos de economía —escuchen bien los señores diputados de la minoría— puede suprimir los cargos públicos que a su juicio considere necesario para el funcionamiento de los servicios públicos.» Vale decir que está contemplado perfectamente dentro del campo administrativo este tipo de causal, o sea, cuando la economía del país está resentida

en tal grado que es imposible mantener la burocracia que está succionando los dineros públicos.

—Suenan la campanilla indicadora de que ha vencido el término reglamentario de que dispone el orador para hacer uso de la palabra.

Sr. Parodi Grimaux. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Domingorena. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Parodi Grimaux. — Refirmando lo que de manera tan brillante expresa nuestro colega, el señor diputado Domingorena, me voy a permitir leer del libro de Bielsa, tomo II, página 171, este extracto de la doctrina que nosotros estamos sosteniendo: «En suma, desde el punto de vista jurídico y político no debe sostenerse respecto del empleado el derecho a ser mantenido en el empleo prescindiendo del interés de la administración, porque si el Estado debiera respetar un derecho del empleado a conservar su cargo, al paso que éste pudiera rescindir el contrato según su voluntad, se crearía para él una situación privilegiada, y además se llegaría a esta anomalía: que el empleo existiría para el empleado, y es lo contrario, pues el empleo requiere al agente o empleado.»

Sr. Presidente (Decavi). — Hago notar al señor diputado por Entre Ríos que ha vencido el plazo reglamentario de que dispone para hacer uso de la palabra.

Sr. Domingorena. — Termino en seguida, señor presidente.

Este mismo pensamiento está reflejado con más autenticidad o claridad por el tratadista Jéze, quien señala: «Si el nombramiento es el acto administrativo mediante el cual se crea la relación de empleo o función, su extinción en todos los casos no requiere un acto formal determinado. Es indispensable la causa legal», que es a lo que tiende, precisamente, el derecho administrativo. Y más terminantemente agrega: «Si la supresión del empleo tiene por único fundamento las necesidades del servicio público, ninguna consideración personal puede ser un obstáculo jurídico para la supresión».

Esto, señor presidente, nos está demostrando que el artículo que tiene a consideración este honorable cuerpo está ajustado a la ley y dentro de las normas del derecho administrativo. Estamos convencidos de ello, y así lo demostramos a la luz de la opinión de los tratadistas.

En cuanto al impacto, al efecto que este artículo ha de causar en los hogares de los empleados y de los funcionarios de la administración, queremos señalar a los señores diputados de la minoría que esperamos que la actitud que nosotros habremos de adoptar de aquí para adelante, en virtud de esta norma legal, no se ha de convertir en un instrumento de represión o de venganza. Si algún partido político tiene derecho a decir en todo el ámbito de la Repú-

blica que tiene autoridad y decoro suficientes; que lo que nosotros perseguimos es nada más que el alivio del presupuesto de la Nación, sin emporcarnos en la persecución de nuestros adversarios políticos, ese partido es, precisamente, la Unión Cívica Radical Intransigente. Lo hemos demostrado no llevando al presupuesto de la Nación a los miles de hombres y de mujeres que esperaban nuestro triunfo para llegar a los puestos codiciados por otras fuerzas políticas. También lo hemos demostrado, porque hemos tenido la serenidad y el equilibrio suficientes para respetar a todos los hombres que estaban dentro de la administración pública; y las leyes de estabilidad que hemos sancionado han de hacer historia en el futuro del país.

En definitiva, señor presidente, legal y políticamente creemos estar prestando un gran servicio a la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: alguien dijo que el andar parlamentario muchas veces conduce a rumbos de improvisación.

Con toda lealtad manifiesto que no pensaba participar en este debate, pero la petulancia montiana por un lado, y el afán de contribuir con humildad y con mi pensamiento, por otro, en defensa de aspectos dramatizados de la vida argentina —como asimismo ideas que he recogido en este debate jerarquizado—, mueven el optimismo de mi participación.

Noto que viejos sueños del radicalismo pareciera que están temblando y se desmoronan en estos instantes. Noto que viejas postulaciones y banderas de redención no se cumplen. Recuerdo un poco atrás en la curva de la historia, cuando este radicalismo enfrentaba la prepotencia de la tiranía, cómo sin sumario, sin respeto y sin dignidad, se daba de baja a funcionarios nacionales porque tenían la valentía de no afiliarse al partido oficialista.

Nosotros hubiéramos querido, señor presidente —yo personalmente lo hubiera deseado—, dar toda nuestra solidaridad en blanco para posibilitar la realización de economías, porque reconozco como hecho cierto de este instante de crisis que es fundamental disminuir los gastos del presupuesto nacional. Es necesario nivelar este presupuesto tan deficitario disminuyendo los gastos y la burocracia, que vienen acentuándose desde hace tiempo. Pero no vemos en la conducción una política coherente en el Poder Ejecutivo nacional, por lo cual, con mis compañeros de sector, en forma solidaria daremos nuestro voto negativo a la medida propuesta.

No es posible que el presidente de la República esté hablando de la necesidad de disminuir

los gastos de la burocracia cuando en muchas provincias hombres surgidos de las mismas filas partidarias están creando 700 u 800 cargos en presupuestos aprobados diez días atrás. ¿Cómo es posible que exista tanta antítesis de conducción entre los gobiernos federales y el central? Hace doce días el partido al cual pertenezco en la legislatura de mi provincia fustigaba estas creaciones, mientras dos días antes el presidente de la República estaba buscando el camino, antiburocrático, para librar de la crisis a la economía argentina.

Existen otros casos en que se repiten estos graves errores. No observamos la coherencia política cuando el actual presidente de la República decía que uno de los aspectos negativos de nuestra adhesión al Fondo Monetario Internacional y a la incorporación argentina a los acuerdos de Bretton Woods era precisamente el aspecto en que los grandes consorcios supercapitalistas del mundo regían las economías de los pueblos y manejaban la soberanía económica de los estados.

Hemos escuchado ciertas palabras en plazas y en plataformas. Hay entre nosotros una distinguida señora diputada a quien le oí una vez en una plaza de la capital de la República, fustigar los acuerdos precisamente en los aspectos de la economía argentina, que son violados por el Fondo Monetario Internacional.

Lo que estamos por aprobar es casi un dictado que surge de la presión de fuerzas que nada tienen que ver con el esfuerzo, la solidaridad y la responsabilidad argentinas; que no vienen a hacer caridad ni a unir sus esfuerzos para la recuperación de la República. Sabemos que los imperialismos del mundo están en otra cosa, que no es la recuperación de los pueblos, máxime cuando juegan su política en todos los países subdesarrollados, como ha ocurrido en Chile, en Bolivia y otros países.

Sr. Uzal. — Si me permite el señor diputado...

Con respecto a la antítesis entre la política seguida en la provincia del Chaco y la seguida en el orden nacional, es posible en en alguna provincia sea necesario aumentar el número de servidores del Estado, lo cual no significa que no sea evidente la enorme burocracia que existe en el orden nacional.

Apuntamos con complacencia la coincidencia de su pensamiento con el pensamiento expuesto por el presidente de la República.

Así como al margen de todos los tópicos extraños al tema que el señor diputado ha señalado, puedo seguir arguyendo en el curso de esta referencia, que nos complace consignar que el señor diputado coincide con el sector mayoritario en la realidad de la burocracia y en las apreciaciones que sobre el particular ha hecho el presidente de la República.

Sr. Presidente (López). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. León. — Con respecto al presupuesto de mi provincia, es una hipótesis saludable al planteamiento del señor diputado de que podría ser necesaria la creación de setecientos puestos. Pero he aquí que cuando yo di el ejemplo, si hay provincias en que tenemos una burocracia sobrecargada, es la del Chaco. Bastaría citar el antecedente de que del presupuesto provincial de 673 millones de pesos, se destinan 350 millones para hacer una administración de los restantes millones de pesos.

En cuanto al otro enfoque del señor diputado Uzal, creo que el hombre de mentalidad simple en el país sabe que uno de los aspectos deficitarios de nuestro desequilibrio económico nacional son los gastos en burocracia, que son gastos improductivos que no crean fuentes de trabajo ni de riqueza. Nadie puede estar en desacuerdo para afirmar en ese sentido. Pero yo quiero informar al señor diputado Uzal que nosotros tomamos otro rumbo en la búsqueda del acierto para salir de esta crisis.

Hay una burocracia hipertrofiada, pero interpretamos que no es a través del injerto en una ley, ante una posibilidad de masivas cesantías, con indemnizaciones o sin ellas, como vamos a contener este problema. Este es un problema que inquieta, que sacude, que provoca, como alguien ha dicho en esta Cámara —creo que el señor diputado De la Vega— y dramatiza la vida del hombre nacional, del hombre que tiene la entrada justa por el presupuesto argentino.

No es posible buscar la salida de esta ley sin crear primeramente las fuentes de trabajo que posibiliten la absorción del hombre de trabajo estatal por el trabajo privado, a través de otro proceso en el régimen de la economía argentina.

Por eso que se procede equivocadamente e interpretamos que el gobierno argentino, a quien hubiéramos querido dar la fe de nuestra pre-ocupación en este aspecto, no nos merece ya, en esta etapa de su proceso, la necesaria como para que esta bancada le dé la firma en blanco, renunciando a nuestro control parlamentario, que está en la Constitución Nacional y que, incluso, es el pensamiento de la propia vida ética del radicalismo.

Aparte de eso, quiero informar que en los últimos cuarenta días, se han nombrado más de cinco mil empleados en la administración pública, y en los últimos dos o tres días hubo ochenta o noventa nombramientos, lo que no condice con el planteo de austeridad y cesantías para provocar la disminución del déficit burocrático.

No es ésta la instancia para estudiar a fondo el proceso de un plan de estabilización que nosotros interpretamos equivocado en muchos aspectos.

Por ejemplo, se habla del milagro alemán y del milagro argentino, sin pensar que el milagro alemán fue posible porque en Alemania Occidental no había presupuesto militar, en tanto que el actual presupuesto militar argentino significa casi el treinta por ciento del presupuesto nacional.

Sr. Solanas. — ¿Me permite una interrupción, con autorización de la Presidencia?

Sr. León. — Sí, señor diputado.

Sr. Solanas. — En varias oportunidades he oído hablar del milagro alemán, comparándolo con la necesidad del milagro argentino.

No podemos trasladar a nuestro medio el milagro alemán para hablar en el mismo sentido del milagro argentino. El pueblo alemán, trabajador y laborioso, no es más digno ni más laborioso que el pueblo argentino, sino que las circunstancias son totalmente distintas. El pueblo alemán tuvo una presión extranjera que actuó indistintamente sobre todas las clases sociales, y entonces el ciudadano alemán, pobre o rico, hombre o mujer, se sintió en un estado de reacción que le permitió luchar codo a codo y hombro a hombro contra quien consideraba su enemigo nacional.

En cambio nosotros padecemos el gran desencuentro nacional. Existe en nosotros un aislamiento peligroso, que esteriliza la posibilidad de un esfuerzo colectivo concurrente para una recuperación. De ahí es que veamos el espectáculo que nos aflige y anonada, de los sindicatos que piensan exclusivamente en intereses personales, como si vivieran en otro planeta, como si no fueran parte de un todo; y en la medida en que todos participemos de la realidad nacional, haremos posible el bienestar de todos.

Aquí no puede haber beneficio para una parcialidad. O todos nosotros salimos a flote, o nos hundimos todos, porque todos somos integrantes de un mismo conjunto.

Por eso es que el milagro argentino, cuando se realice —que me perdone el pueblo alemán— será superior al milagro alemán, porque habremos vencido un enemigo mayor y más grande, que es el interno, el que nace del desconocimiento que tiene el hombre común de que está llevando en su seno su propia destrucción al no pensar que en la unidad ciudadana está su propia salvación.

Sr. León. — Comprenderá el señor diputado Solanas que por ningún concepto puede arrastrarme —sé que no lo pretende— a que yo crea o no tenga fe en la capacidad del pueblo argentino.

Sr. Solanas. — En absoluto, señor diputado. Le ruego que no le dé esa interpretación.

Sr. León. — Soy un hombre que cree que nuestro pueblo si no es mejor, no es peor que ninguno de los otros pueblos del mundo. Nuestro pueblo tal vez no sea un pueblo de quijotes,

pero también sé que no es un pueblo de pusilánimes. Sé que nuestra mano de obra es una de las mejores del mundo. Sé que nuestro hombre es uno de los tantos hombres honrados que habitan en el mundo. Con esa misma conciencia del señor diputado Solanas, yo aspiro a nuestra recuperación. Cuando se quiere comparar el futuro milagro argentino, que ojalá se realice para felicidad de todos, con el milagro alemán, estamos marcando simplemente un hecho, como lo señalaba un diputado de nuestro sector, diciendo que en este proceso habría que haber empezado por reducir los grandes gastos militares e informaba cómo en el milagro alemán no jugaba para nada el déficit de los presupuestos militares porque no existía, ya que por razones diversas, la ocupación militar francesa, inglesa y norteamericana era pagada por los respectivos países.

Dije que quería dejar expresada en muy breve síntesis mi opinión en este aspecto.

Quiero dejar establecido que vamos a votar en contra, pretendiendo sí mantener un poco la paz, la serenidad y la esperanza en los hogares de los hombres que están prestando servicios en la administración nacional.

Hubiera querido, reitero, poder votar afirmativamente este asunto, pero ya no tiene derecho el Poder Ejecutivo, que ha violado tantas de sus grandes banderas, a exigirnos este voto que compromete a nuestro partido, que incluyó en la Constitución de la República la estabilidad del empleado público.

Voy a votar en contra de ese artículo en homenaje a la serenidad de las muchachas jóvenes y viejas que adornan las madrugadas del país concurriendo a trabajar a las oficinas estatales.

Voy a votar en homenaje a la serenidad de los hombres jóvenes y viejos que andan prendidos a los vehículos de transporte o montados en sus bicicletas, sobre los pavimentos de las ciudades y sobre la tierra de nuestros campos para servir con su esfuerzo al Estado argentino.

Quiero para esa gente la propia serenidad que venimos buscando todos los señores diputados para el hombre común, porque quiero que alguna vez el Estado no sea el peor patrono y pueda ser, en cambio, el mejor patrono de la tierra para nuestro orgullo y jerarquía.

Creo que hace al orgullo argentino y a nuestro propio orgullo parlamentario realizar esta discusión con altura y con cordialidad. Creo que es una de las discusiones que pueden honrar al Parlamento argentino. Los señores diputados de la mayoría tienen fe en un Poder Ejecutivo que va a discriminar las posibilidades y número de las cesantías. Nosotros ya no tenemos fe porque han sido burladas en muchos aspectos la esperanza y la ilusión de los hombres argentinos que han votado a este gobierno.

Tenemos el derecho de discrepancia. No hemos aprendido nada, señor diputado Monte. Nosotros venimos de lejos en esta misma posición. La sabemos de siempre. No sé si el señor diputado habrá defendido muchos casos en el fuero laboral, pero esta bancada y nuestro radicalismo también han sido solidarios con la estabilidad y con los hombres de trabajo argentino.

En nombre de la tranquilidad, en nombre de la paz de la familia argentina...

Sr. Domingorena. — La intervención en la provincia de Entre Ríos dejó cesantes a dos mil empleados en dos años, señor diputado.

Sr. González. — En la provincia de Buenos Aires ascendieron a ocho mil los cesantes.

Sr. León. — Los señores diputados saben perfectamente que es un cargo que no puede hacerse a nuestro partido. Alguna vez habrá que terminar en este Parlamento esa permanente bambolla de idas y de vueltas, de acusaciones o recusaciones que no construyen.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Decavi). — Ruego a los señores diputados que no interrumpan al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. León. — Nosotros, todos juntos, posibilitamos una revolución; juntos en la resistencia, el radicalismo argentino posibilitó la recuperación y la derrota de la dictadura en el país. Hubo muchos hombres de esa y de esta bancada que pusieron su esfuerzo en el gobierno provisional. Saben los señores diputados que si en alguna provincia hubo hombres nuestros que pudieron tener hegemonía en la conducción del gobierno, hubo muchos comisarios, jueces de paz y gobernadores que estuvieron también en la órbita de la Unión Cívica Radical Intransigente.

Alguna vez tenemos que terminar en este Parlamento ese constante volver al pasado. Ustedes mismos han dicho que hay que olvidar.

A mí no me acusan las dos mil cesantías de Entre Ríos o las ocho mil de Buenos Aires. Me importa que de aquí en adelante —y ése es el concepto de nuestro partido— hagamos marcar otro compás al país argentino.

Nosotros somos una expresión del pueblo en este Parlamento; olvidemos un poco el pasado y entremos a andar hacia mañana.

Nuestro bloque juega con limpieza en este debate; decimos con jerarquía nuestro pensamiento. En homenaje a la serenidad que yo deseo, en homenaje a la tranquilidad de los hombres y sus familias que trabajan al servicio del Estado, votaré en contra de este artículo 13 que viola la Constitución Nacional y que, como dijo el señor diputado de la Vega, va a contribuir al drama del hombre empleado del Estado argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monte. — ¿Me permite, señor diputado, decir antes algunas palabras?

Sr. González. — Sí, señor diputado.

Sr. Monte. — Muchas gracias.

Voy a citar tres hechos que confirman mis aseveraciones, no sin antes decir que he pensado bien sobre si es cierto —y esto sin jactancia ni petulancia— que he defendido a más hombres de trabajo que todos los integrantes juntos del bloque de la 1ª minoría. Se puede comprobar.

Siendo presidente del Comité Nacional del radicalismo el doctor Santiago del Castillo, militante del partido político de la Unión Cívica Radical del Pueblo, dictó una resolución prohibiendo a los trabajadores radicales estar afiliados a la CGT.

Siendo yo presidente del Congreso Provincial de la Juventud Radical de Córdoba, fui a entregar al presidente del comité de la provincia, doctor Eduardo Gamond, ex candidato a gobernador en la última elección por el partido que representan los señores diputados de la 1ª minoría, las resoluciones de dicho congreso. Una de ellas decía que los jóvenes radicales debían afiliarse a las organizaciones sindicales y luchar por la defensa de sus intereses, especialmente por el derecho de huelga y la autodeterminación de los trabajadores argentinos. En su condición de presidente del comité de la provincia recriminó a la juventud radical de Córdoba haber hecho tal exhortación a los jóvenes trabajadores, que significaba impulsarlos a la lucha por la defensa de sus intereses y de la democracia sindical.

Y cito un tercer hecho. Defendí a los trabajadores de la Fundición MIRA en el Departamento del Trabajo. Ganamos en todas las instancias, pero hubo una apelación de la empresa patronal, y el caso fue llevado en recurso ante el ministro de gobierno, a la sazón el doctor Juan Palmeros, militante de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Los propios obreros de la fundición, por temor a una decisión adversa, en razón de la caracterizada actuación del ministro de gobierno en contra de los trabajadores cordobeses, me pidieron que procurara por todos los medios posibles postergar el pronunciamiento ministerial. Nosotros no accionamos para acelerar la resolución, y tuvimos que esperar hasta después del 19 de mayo para que el nuevo ministro de gobierno de Córdoba, el doctor Pérez Martín, hiciese justicia a los trabajadores de la referida empresa.

Por último quiero decir que la matadura duele cuando se golpea.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. González. — Refiriéndome concretamente al asunto que debatimos, el proyecto del diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quiero señalar que las objeciones que se han formulado esencialmente son dos: la primera en el aspecto constitucional; la segunda en el económico.

En mi opinión, las exposiciones de los señores diputados Parodi Grimaux y Domingorena han demostrado exhaustivamente el error en que se incurre cuando, en nombre de la garantía constitucional del artículo 14, referida a la estabilidad del empleado público, se intenta mantener al país encajonado en una situación sin salida, olvidando que los intereses de la Nación están por encima de cualquier otro tipo de interés en el ámbito nacional.

En el campo económico, el señor diputado Liceaga, en una exposición que califico de enjundiosa porque entró al fondo del problema, probó que inevitablemente, en función de responsabilidad de gobierno, tenemos que adoptar lamentablemente esta decisión, porque no hacerlo implicaría cerrar los ojos a la realidad y dejar de cumplir con el mandato fundamental, que es la preservación de la economía nacional al servicio de todos los sectores del país.

Así ubicadas las cosas, me parece oportuno en esta instancia volver a marcar con tono justo el panorama económico nacional, el panorama de esta economía argentina seriamente lesionada. No tengo a mano las cifras demostrativas del proceso operado en el transcurso de los últimos años, pero me basta mi recuerdo para afirmar que, en un país de economía esencialmente agropecuaria, cuando en los años ya lejanos de 1936 y 1937 se producía maíz en un orden superior a los diez millones de toneladas, durante estos años inmediatos hemos visto decrecer agudamente la producción. Y todavía estamos lejos de recuperar aquellas cifras que marcaban el apogeo de la potencialidad agraria argentina.

En el campo pecuario, que es la otra gran fuente productora de divisas para el país, hemos visto caer las cifras de manera alarmante a través de una política de despilfarro y de falta de control con respecto al futuro de la riqueza nacional.

Más tarde o más temprano, algún gobierno de este país tenía que asumir la tarea dura, difícil, angustiosa, de poner orden en las finanzas nacionales, de intentar restaurar la economía maltrecha, de levantar las cifras de la producción, de reducir los consumos de un pueblo que vivió en la euforia falaz de la inflación, que implica la creencia ingenua de la riqueza ganada sin esfuerzo. Algún gobierno tenía que hacerlo y tenía que ser un gobierno que, por su lealtad, pudiera ponerse por encima de los intereses partidistas; tenía que ser algún go-

bierno que fuera capaz de cumplir, por primera vez en la historia política de la República, la afirmación de que quería tomar al poder político no para hacer política de comité sino para gobernar para el país entero.

Nosotros medimos la responsabilidad, advertimos lo dramático de la instancia, sabemos que hay inquietud y zozobra en el campo de la administración pública; pero decimos, con intrépida lealtad, que anteponemos los intereses supremos de la colectividad porque tenemos la responsabilidad, que no eludimos, de salvar el porvenir de la República, estabilizando su economía, restaurando sus fuentes de producción y colocando al hombre argentino en un ambiente económico que le permita volver a pensar otra vez en la técnica del ahorro que capitaliza, en la técnica de la estabilización que crea riqueza verdadera y tranquilidad espiritual, porque aleja la posibilidad del enriquecimiento fácil.

Yo quiero señalar esta noche a los que pretenden entonar cánticos plañideros, en nombre de la justicia social, para defender al sector de trabajadores que integra la burocracia argentina, que hay que analizar el perjuicio enorme que algunos millares ocasionan a muchos millones de trabajadores, que ven envilecida su moneda; proceso que tiene su raíz fundamental en la necesidad emisionista de un Estado que recauda apenas la mitad de lo que gasta y mantiene una burocracia que no beneficia al país sino que, por el contrario, lo perturba y obstruye en su desenvolvimiento económico.

Yo quiero decir estas palabras de verdad argentina, porque el país necesita un gobierno que, en algún instante, tenga el coraje de pararse en medio de la vorágine y derribar las columnas levantadas por las palabras altisonantes y lastimeras, para volver la cara al pueblo, que está detrás, y decirle intrépidamente, cualesquiera sean las consecuencias inmediatas en el campo político, que asumimos la responsabilidad, conscientes del riesgo que esto implica en el campo político, advertidos de la resonancia política que esta medida ha de tener, porque escogemos el camino que conduce a la consolidación de una economía nacional sana y renunciamos definitivamente a embarcarnos en la corriente de perversión moral que implicó lanzar a la República por los caminos de la inflación, que llevó al escepticismo, al descrédito y a la inmoralidad a todos los sectores de la vida nacional.

De aquí para adelante en este país cada hombre ganará su sustento con su esfuerzo y cada uno tendrá que adecuar sus gastos a sus posibilidades reales, porque no es posible que en función de la creencia de que el dinero en las manos se desvaloriza, estemos imprimiendo un ritmo circulatorio extraordinario al dinero que ya está en circulación en el país.

No es posible que los hombres de todas las categorías sociales se apresuren a gastar su dinero y contraer deudas, porque aprendieron muy bien la lección de que el gran negocio es gastar y contraer deudas.

Tenemos que decirle a la República que estamos decididos a terminar con esta política inflacionaria que todos los meses insufla millones de pesos, que no tenemos y que son la mera resultante de una vuelta a la máquina impresora que lleva el engaño a las masas.

He visto en esta ciudad cosmopolita, «edificada sobre muros y costumbres» como alguien dijera una vez, una ciudad alegre y confiada, que vive en la euforia de una riqueza inexistente. La veo todavía, después que están aún golpeando las palabras dramáticas del señor presidente de la República y después que se han alzado algunas voces admonitorias para señalar el peligro de que el país está al borde del precipicio, en sus noches luminosas de Buenos Aires, en los centros de lujo y de despilfarro o en los hipódromos poblados de multitudes; veo a una ciudad de hombres y mujeres que parecerían vivir en otro planeta y que no advierten que marchan implacablemente hacia un camino de austeridad, que estará marcado por el imperio ineludible de la necesidad.

Me parece función de gobierno responsable advertir al pueblo de esta dramática realidad. No hacerlo implicaría complicarse en la política de estos últimos años en que vivió la República, en que se habló de la ganancia sin esfuerzo, porque total el dinero que se gastaba hoy era reemplazado al día siguiente por dinero no ganado, que provenía de la trampa a la economía del trabajo que le creó la creencia ingenua de que derrotaría los acontecimientos futuros, que podría ser rico sin esfuerzo y sin trabajo porque vive en el país mejor del mundo. Nosotros decimos esta noche, advertidos de la dramática instancia que vive la República, que esta solución que damos con nuestro voto afirmativo en pro de la sanción del proyecto de ley del señor diputado Prece no es nada más ni nada menos que una parte integrante de ese vasto proceso que, como señalaba el señor diputado Perette, encierra una voluntad realizadora.

No hacemos economías en el presupuesto como una imposición que así lo determine desde afuera, sino porque es la única salida responsable para el país; porque un país que recauda 50 mil millones de pesos no puede darse el lujo de gastar el doble de lo que obtiene como recursos, para no quebrantar su economía.

Nosotros tenemos que denunciar que heredamos una política inflacionista iniciada por la dictadura peronista, aplicada por el gobierno de la Revolución y que continuamos hasta ahora para mantener en pie la estructura económica.

Para no seguir la falacia que vive el país, la única salida que tiene es acrecentar su producción y disminuir su consumo en todos los sectores.

Tengo que admitir con sentido realista, y lamentablemente es así, que las clases que sufrirán más serán las clases del trabajo, los sectores obreros y los empleados, es decir la clase media argentina, porque siempre fue así en todas partes del mundo, porque a pesar de las grandes transformaciones, dentro de la estructura capitalista los hombres ricos podrán ver disminuidos sus ingresos pero seguirán siendo siempre ricos y podrán darse el lujo de una vida dispendiosa; pero los hombres de trabajo, que son la gran mayoría del país y que representan el gran sector del consumo: los trabajadores, la clase media argentina, son los que sufrirán esta política de reducción de consumos.

Apuntaba con acierto el señor diputado Carrettoni, compañero de bancada, que en la medida en que la producción es igual a consumo más ahorro, el ahorro se descompone en inversión y exportación. Estos términos son invariables; estos términos son iguales entre sí. Cada uno de ellos, sumados, equivale al total de la renta nacional. La producción total del país es la renta nacional, es la posibilidad de riqueza abierta a todos los habitantes del país. Y esa renta se descompone, a su vez, en consumo, inversión y exportación.

Nosotros necesitamos aumentar las inversiones, pero como no tenemos capacidad de ahorro hay que recurrir al capital extranjero. Nosotros necesitamos aumentar las exportaciones para ganar divisas y enjugar el déficit de la balanza de pagos. La única forma que tenemos de aumentar la exportación es incrementando efectivamente la producción y disminuyendo los consumos.

Esta es una política dura, impopular, heroica, dramática. Yo afirmo que hace falta el coraje civil que exhibe el señor presidente de la República para hablar por radio y decir a toda la población que ésta es la hora del sacrificio argentino y de la responsabilidad nacional. Desde estas bancas no podemos ser menos, ni podemos elegir los caminos fáciles; no podemos cantar loas doloridas en nombre de las víctimas no buscadas de este proceso económico. Tenemos que tomar la posición correcta y leal afianzada en esta línea que marca la única posibilidad que tiene el país.

Andaremos por este camino. No podría predecir ahora lo que acontecerá en el campo político y social de la República; pero yo afirmo que hemos adquirido la fortaleza moral necesaria para renunciar a la política que busca recolectar sufragios y elegir el camino de salvar a la República en su economía. Algún día el país advertirá que hubo una generación que tuvo el gobierno, en un instante de la demo-

cracia argentina, y que fue capaz de asumir la tremenda responsabilidad de venir a corregir errores que heredó, que cosechó pero que no sembró, errores de una larga etapa de despilfarro, de irresponsabilidad, de corrupción y de perversión moral en la República.

Con este sentido esta bancada de la mayoría, no por irresponsabilidad ni por inconsciencia, no por carencia de sensibilidad frente al drama que podrá darse en algunos hogares argentinos, sino por sentido austero de su deber republicano, votará afirmativamente el artículo que considera la Honorable Cámara.

Quiero señalar, para tranquilidad de grandes sectores populares, que la política que está determinada en el proyecto del señor diputado Prece establece un orden de prelación que evitará seguramente cesantías a millares, porque a través de la técnica de la aplicación rígida de las incompatibilidades, a través de la eliminación de los jubilados que desempeñan puestos públicos, a través de la exigencia de que se jubilen los funcionarios que están en condiciones de hacerlo y a través de la congelación de vacantes, quizás el saldo no alcance más que a unos pocos millares.

Afirmo también que no queremos disfrazar esta política con recursos de tipo literario cambiando el sentido lexicográfico de las palabras. Si es necesario hacer cesantías las haremos, porque hemos de anteponer los intereses nacionales a los personales y porque hemos de tener la aparente dureza de corazón que hace falta cuando se ejerce una conducción para dejar de lado las reservas de tipo personal en aras de los intereses del país y de la colectividad.

El problema está planteado en esos términos: o el país comprende el drama, o el país advierte la realidad, o el país despierta de este largo sueño en que vive, o el país comprende que aquello que aprendió en la lejanía de la escuela primaria de que ésta es la tierra más rica del mundo es cierto potencialmente pero es mentira en función de producción de riqueza, o el país advierte que es preciso regresar a las fuentes del trabajo y levantar las cifras de la producción agropecuaria, o el país entiende que hay que desarrollar las riquezas nacionales y enjugar el déficit de la balanza de pagos, que acusa un drenaje de 300 millones de dólares en petróleo, de 100 millones en carbón, de 500 millones en maquinarias que podrá resolver la siderurgia argentina, o de lo contrario el país sufrirá consecuencias verdaderamente desastrosas.

Hay que promover una profunda transformación nacional en un campo de austeridad y sacrificio, no para crear una potencialidad económica argentina en beneficio de pequeños sectores. La política tradicional de la oligarquía argentina fue capitalizar al país y lo logró en

la época lejana que está en el recuerdo dolorido de los hombres del pueblo que conocieron la desocupación y las ollas populares. Fue una política de capitalización en beneficio de pequeños sectores, una política de sentido clasista que enriquecía a los poseedores de la tierra y a los novilleros proveedores de frigoríficos extranjeros, en tanto millones de argentinos deambulaban por los caminos de la República sin porvenir para sí y para sus hijos.

No queremos volver a esos tiempos. No nos importa que ahora transitoria y lateralmente, sin proponérselo, se enriquezcan de pronto algunos sectores del país, que constituyen la más alta expresión del privilegio y de la reacción en el pensamiento progresista de la República. Esa no es la finalidad. La finalidad es promover e incrementar la riqueza nacional, y afirmamos desde ya, como un compromiso solemne contraído con el pueblo, que se operará la capitalización que buscamos y se promoverá una política de justa distribución de ingresos, para que haya un país rico y un pueblo rico, y no un país rico frente al pueblo empobrecido, como sucedía en la época de la oligarquía, ni tampoco un pueblo rico en un país pobre, como en tiempos de la dictadura depuesta.

Queremos una riqueza nacional al servicio de la colectividad. Desarrollamos esta política, que es la única que corresponde, advertidos de que esto aparentemente traiciona nuestros más íntimos deseos y no se compagina muy bien con los ideales que pregonamos a través de los años en nuestra dura lucha al servicio del pueblo; pero con sentido de responsabilidad regresamos sobre nuestros pasos, nos colocamos en la justa encrucijada en que se debate y juega el porvenir de la República y asumimos la responsabilidad.

La etapa de la recuperación será cumplida. El pueblo puede confiar en nosotros, por nuestra probada vocación al servicio de las grandes causas populares. No somos instrumentos ejecutores de la política oligárquica que vienen a desarrollar planes que enriquezcan al privilegio y hundan al pueblo en la miseria. Podemos condenar transitoriamente a todos los sectores del pueblo a un sacrificio que nace de la austeridad necesaria e ineludible, pero afirmamos, y en ello va comprometido el honor de hombres que han entregado sus vidas a la causa de la República, que realizaremos una política social que importará una justa distribución de la riqueza nacional, en un país fortalecido económicamente y capitalizado por el esfuerzo de todos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente: reconozco que el señor diputado González, con el coraje que ha demostrado en muchas oportunidades, ha formulado un planteamiento económico muy distinto al que planteó el sector gubernista antes de llegar al gobierno.

Hubiera sido interesante que ese análisis lo hubiera hecho el 20 de febrero antes de las elecciones. Pero reconozco que sus reflexiones tienen un valor de severidad que debe destacarse. No creo que sea justa su apreciación en integridad, pero reconozco que este problema hay que llevarlo al análisis integral del problema económico-financiero argentino. También es exacto que se ha heredado una situación económica. No es este el momento de un debate de esta índole, pero también debemos decir que en nueve meses este gobierno ha acrecentado y multiplicado los problemas económicos, la circulación monetaria y la crisis del país.

Con respecto a expresiones de los señores diputados Parodi Grimaux y Domingorena relativas al aspecto jurídico, quiero señalar que esta disposición es absolutamente inconstitucional porque implica, como lo dice la parte final del artículo, que se suspenden durante el lapso que va hasta el 31 de octubre de 1960 las disposiciones legales que se opongan a esta norma, es decir, la suspensión de la Constitución y anula todas las garantías de la ley de Estatuto del Empleado Público.

En cuanto a la opinión de autores como Jéze debo decir que se refiere a un análisis doctrinario que no prevé la existencia de una norma constitucional de estabilidad expresa como ésta. Puedo asegurarles, además, que toda la obra de Bielsa tiende a establecer la vigencia del principio de la estabilidad constitucional y que, existiendo esa norma, no se puede suspender por vía de una ley.

Sr. Parodi Grimaux. — Quiero aclararle al señor diputado que la cláusula que propone el señor diputado Prece no suspende ninguna disposición constitucional y de su propio texto se desprende que se refiere a disposiciones legales, no constitucionales. Por otra parte, sabe el señor diputado que la Constitución de Entre Ríos en el año 1933 ya estableció la estabilidad del empleado público, lo que no quiere decir que los empleados públicos son absoluta y definitivamente inamovibles, pues su remoción está condicionada a las condiciones que establezca la ley.

Sr. Domingorena. — El señor diputado sabe que la intervención Calderón decretó muchas cesantías y no tengo conocimiento de que haya hecho juicio ningún empleado público.

Sr. Perette. — Les voy a contestar a los dos colegas por Entre Ríos.

En primer lugar, esta cláusula suspende en definitiva la vigencia del precepto constitucional. En segundo término, esta ley no establece

una reglamentación de la garantía de estabilidad. La suspende y le deja al Ejecutivo la discrecionalidad de su aplicación. Si fuera una ley reglamentaria tendría que haber establecido las causales, el derecho de defensa y todo lo que hace al estatuto de la estabilidad del empleado público, que es lo que se ha hecho en Entre Ríos.

Con respecto a lo que ha dicho el señor diputado Domingorena, de cesantías decretadas por la intervención de Entre Ríos, quiero señalarle lo siguiente. Se trataba de un gobierno defacto, de un gobierno revolucionario que no decretó 2.000 cesantías sino 312 cesantías.

Sr. Domingorena. — En Paraná.

Sr. Perette. — En Entre Ríos.

Sr. Domingorena. — No, señor diputado.

Sr. Perette. — Tengo todas las constancias.

Sr. Domingorena. — Se ha comido muchas.

Sr. Perette. — Es como digo. Y le voy a decir esto: durante el actual gobierno de la UCRI, como primera medida en pleno estado de derecho el gobernador doctor Uranga dictó el decreto 401 de 1958 declarando al personal en comisión; y hace pocos días dictó el decreto 4.782 bis, donde dispone la cesantía en masa de todo el personal nombrado entre el 2 de enero y el 30 abril de 1958. Y ya hay más de mil cesantes en la provincia de Entre Ríos, con la agravante que en esos cargos se va a nombrar a otros empleados. De manera que no es por razones de economía sino por mezquinos intereses de aparcería política.

Sr. González. — ¿Y el 30 de abril había nombramientos?

Sr. Parodi Grimaux. — A los fines de que la verdad quede perfectamente establecida, quiero hacer notar que, constitucionalmente, el empleado público entrerriano adquiere la estabilidad luego de un período de desempeño del cargo, y que el decreto que dejó cesantes últimamente a empleados de Entre Ríos se refiere a los recientemente nombrados. La generalidad era clientela electoral nombrada por la intervención después de haber perdido la elección, un mes antes de que subiera la UCRI al gobierno.

Por otra parte, quiero aclarar que el planteo desde el punto de vista constitucional y legal que hicimos el señor diputado Domingorena y yo se apoya, no en los derechos que tendría el empleado público —que es una cosa distinta—, sino en la necesidad que tiene el Estado de reducir algunas funciones y empleos. Lógicamente, reducida o suprimida la función o empleo, el empleado queda cesante, porque desaparece el cargo.

Quisiera que el señor diputado mencionara una sola disposición constitucional o legal que prohíba a un gobierno suprimir un cargo o empleo que resulta innecesario para los intereses del país o la provincia.

Sr. Presidente (Decavi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Voy a contestar al señor diputado.

En primer término, quiero señalar que el decreto por el cual ya se efectuaron más de mil cesantías —decreto dictado por el actual gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente— no cumplirá la finalidad que se pregona, porque los cesantes van a ser reemplazados por nuevos empleados...

Sr. Parodi Grimaux. — No, señor diputado.

Sr. Perette. — Sí, señor diputado. Surge del propio decreto. Tengo aquí su texto, cuya inserción pido en el Diario de Sesiones. Se refiere a las designaciones entre el 2 de enero y el 30 de abril.

Además, se refiere a empleados —y en esto está en error el señor diputado Parodi Grimaux— que tienen más de los seis meses de antigüedad que establece la ley 3.289, que tengo en mi poder, con todos los antecedentes de las cesantías dispuestas por la intervención y por el actual gobierno.

Sr. Parodi Grimaux. — La Constitución de Entre Ríos establece un año, y no seis meses.

Sr. Perette. — La ley establece seis meses, y no un año. Está equivocado el señor diputado, y se lo voy a demostrar.

La ley que se va a sancionar hoy da al Poder Ejecutivo facultad discrecional de hacer todo lo que se le antoje; no es una ley reglamentaria, es una suplantación de un derecho. Además, toda la doctrina establece que la legislación debe prever, en un caso de supresión de cargos, garantías, que aquí no se contemplan, ya que no se dan recursos, no se estipulan tribunales, es decir, se anula todo lo que hace a la esencia de un estatuto del personal civil.

Este despacho es absolutamente inconstitucional. Las razones dadas con elocuencia por el señor diputado González, y también por el señor diputado Liceaga, son para mí las más poderosas, pero deben ser tomadas en cuenta mediante un estudio integral, pero no justifican las cesantías ni la inconstitucionalidad.

Advierto a los señores diputados, con las palabras del señor presidente del comité nacional, digno argentino, Crisólogo Larralde, que debemos considerar «un plan hecho por el país y para el país, un plan nacional, no un plan extraño», impuesto —en los puntos 8º y 9º— por el Fondo Monetario Internacional. No son las exigencias del país las que lo imponen. Es el fondo monetario que se impone.

Tiene, entonces, la República que saber que lo que hoy se sostiene aquí no fueron las causas que invocó la Unión Cívica Radical Intransigente para llegar al gobierno. Sería interesante saber qué hubiera ocurrido en el país si esto se hubiera dicho a la República el 20 de febrero de 1958, pero ése no es el problema.

Es necesario lograr, con el esfuerzo común, la solución económica necesaria. De manera que asumiendo todos la cuota de responsabilidad que nos pueda caber en este problema, trabajemos sin pensar que hemos de lograr una salida con el sacrificio de la clase media o del sector humilde del país, porque ello no constituirá la solución adecuada. Solamente se tratará de soluciones financieras, que al final consistirá en el gran drenaje de nuestra riqueza para beneficiar a los grandes consorcios CADE y ANSEC, que han de lograr el gran negocio del año a costa del sacrificio argentino.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez Machado. — ¿Cuántos señores diputados se encuentran anotados para hacer uso de la palabra?

Sr. Presidente (Decavi). — Uno solo: el señor diputado por el Chaco.

Sr. Gómez Machado. — Señor presidente: hago moción de orden para que, una vez que haya hecho uso de la palabra el señor diputado Gutiérrez, se cierre el debate.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar la moción de cerrar el debate después de que el señor diputado por el Chaco haya hecho uso de la palabra.

—Resulta afirmativa de 95 votos; votan 105 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Gutiérrez (V. H. B.). — Señor presidente: seré breve, pero quiero manifestar que varios señores diputados no habíamos pensado intervenir en este debate.

Estimo que la participación en los debates resulta más saludable cuando el tema es encarado con amplio dominio y versación de la materia que se discute. Yo he escuchado gustoso a los señores diputados que demostraron conocer la técnica del derecho administrativo al juzgar eficazmente el asunto que se encuentra a nuestra consideración. Pero como el colega por el Chaco, señor diputado León, ha hecho afirmaciones que no se ajustan a la realidad, le manifiesto que el mal de los empleados públicos lo padecemos en nuestra provincia quizás en mayor intensidad que otros Estados federales de la República, porque nosotros, en el Chaco, no heredamos otros empleados públicos que la enorme avalancha de empleados tomados, en su inmensa mayoría, al término de la Revolución Libertadora, y casi todos correccionarios del señor diputado León.

Sr. León. — Si me permite el señor diputado...

No podrá dar cifras el señor diputado, porque si las diera demostraría que yo tengo razón. Ha sido superado ampliamente, en los últimos tiempos, el número de empleados.

En cuanto al gobierno provisional, sabe bien el señor diputado que en el Chaco fue un go-

bierno que no tenía nada que ver con nuestro partido político, al que mucho criticamos; que tres de los cuatro ministerios estaban ocupados por conservadores y que la mayoría de los jueces de paz y muchos comisarios eran correligionarios del señor diputado Gutiérrez.

Pido al señor diputado que me diga dos cosas: primero, que me dé cifras para justificar su aserto; segundo, que me diga en qué falté yo a la realidad.

Sr. Gutiérrez (V. H. B.). — Concedí la interrupción al señor diputado León porque creí que me iba a llevar a otro planteamiento.

En el Chaco no nos vamos a adivinar la suerte (*Risas*). Sabemos perfectamente que dos de los ministros de la revolución fueron conspicuos dirigentes del radicalismo del Pueblo, y que la mayor parte de los subsecretarios eran del partido del señor diputado. Pero yo no voy a hacer polémica.

Sr. León. — No se puede hacer porque no es cierto lo que afirma el señor diputado. Tengo que decir con energía al señor diputado que eso es inexacto.

Sr. González. — Ustedes tenían los ministros y nosotros los comisarios.

Sr. León. — Ustedes tenían los jueces de paz. Yo estoy tranquilo porque no tuve cargos...

—Hablan a la vez los señores diputados González y León.

Sr. Presidente (Decavi). — Ruego al señor diputado González que no interrumpa al señor diputado León, porque la palabra la tiene el señor diputado Gutiérrez. (*Risas*.)

Sr. Gutiérrez (V. H. B.). — Quería decir que el señor diputado León, a quien le gusta lo mismo hablar con palabras fáciles de mujeres de talle delgado como las palmeras cubanas, o de que los colonos del Chaco queman rastros de algodón, en una dialéctica efectista ha querido impresionar a la Cámara y al país diciendo infundadamente que de los 600 millones de pesos del presupuesto de la provincia del Chaco se emplean cerca de 400 millones en burocracia. Eso no es exacto. Digo desde esta banca al país que es totalmente inexacta la aseveración del señor diputado; y conste que no acostumbro a defender al gobierno de mi provincia, que se defiende solo por sus hechos, por las obras que realiza y por las que está en camino de realizar.

De ese presupuesto, que asciende a pesos 673.600.884 que aprobaron los correligionarios del señor diputado León por unanimidad en la sesión del 31 de diciembre, según consta en la crónica periodística que tengo sobre mi banca, se asegura para gastos de empleados administrativos solamente el 42 por ciento, es decir pesos 282.912.361. Lo que no dijo el señor diputado León es que este año en el Chaco se destinará a caminos públicos el 28 por ciento de los ingresos provinciales.

Sr. León. — Se sale de la huella el señor diputado.

Sr. Gutiérrez (V. H. B.). — Lo que falta decir es que hemos recibido una provincia totalmente anarquizada en sus finanzas; que sobre 15.000 contribuyentes que pagan, hay otros 50.000 que todavía no fueron censados.

Debo agregar que en 1958 no hubo déficit de presupuesto y que ese presupuesto significa la construcción ya iniciada de 500 kilómetros de caminos pavimentados, la construcción del aeropuerto internacional de Resistencia, la creación de un ingenio por el sistema cooperativo, la fundación de numerosas cooperativas e institutos agrícolas, la creación de numerosas plazas de policías, que no teníamos y, lo que es más interesante, la creación de numerosos puestos de maestros. Ahí está el crecimiento de la burocracia chaqueña. Si burocracia es la que nombra maestros, bendita sea, y sobre todo sin déficit de presupuesto. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. León. — A esta altura del debate los hombres del Chaco no podemos tener el privilegio de distraer a los señores diputados. Quedan en pie todas mis afirmaciones: el 42 por ciento del presupuesto del Chaco es para burocracia.

Sr. Breyter. — Pero antes había dicho el 80 por ciento.

Sr. León. — No. Dije que sobre 700 millones de pesos, casi 400 millones se destinaban a la burocracia. Haga números y porcentajes.

Se crean seiscientos cargos nuevos, lo que ha sido ratificado por el propio señor diputado Gutiérrez.

En cuanto a las obras a que se ha referido el señor diputado Gutiérrez, resulta elemental que la construcción de un aeropuerto, de 500 kilómetros de pavimento y de otras obras que enunció, no pueden salir de un presupuesto de 700 millones que destina la mitad del mismo a burocracia. Los pavimentos que se harán han de serlo con fondos de la coparticipación de un convenio con Vialidad Nacional, y el aeroparque en virtud de otro convenio con Aeronáutica. El presupuesto provincial nada tiene que ver con esas obras. Los cargos se han creado para maestros, para inspectores de bosques y para policías. Pero se han creado.

Tampoco es cierta la unanimidad en la Legislatura provincial. Los hombres de mi partido en la Legislatura provincial impugnaron la creación de estos cargos, que no están de acuerdo con la situación económica de la provincia, aunque no sea deficitaria.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parodi Grimaux. — He afirmado categóricamente que la Constitución de Entre Ríos esta-

blece como condición para acordar la estabilidad, un año consecutivo de servicios. El señor diputado Perette dijo que yo estaba equivocado, y por ello quiero leer la disposición, que dice así: «Artículo 21. — Ningún empleado de la provincia o de las municipalidades con más de un año consecutivo de servicios podrá ser separado de su cargo...», etcétera.

Quiero hacer ahora otra aclaración. No es exacto que el gobierno de Entre Ríos haya dejado cesantes a más de mil empleados. Si fuera exacto, demostraría lo que afirmo: que en los últimos meses la intervención federal ha ubicado no a cientos sino a mil individuos de su clientela electoral.

Sr. Perette. — Cuando yo me he referido al plazo, hice referencia a la ley 3.289 del año 1940, que reglamenta el artículo 21 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos de 1933, que usted ha leído, y que dice textualmente en su artículo 39: «Los nombramientos para el ingreso a la administración se harán por el término de seis meses. Al vencimiento de éste, el tribunal de competencia informará a la autoridad que lo hubiera efectuado sobre las aptitudes del empleado y su eficiencia en el cargo. Siendo el informe favorable, el nombramiento será confirmado y desde ese momento el empleado tendrá la estabilidad.»

Sr. Presidente (Decavi). — La Presidencia hace notar al señor diputado por Entre Ríos que se ha cerrado el debate.

Corresponde votar el artículo propuesto por el señor diputado Prece, con las modificaciones sugeridas.

Sr. Perette. — Señor presidente: hay una moción de orden para que este artículo pase a comisión. Esta moción debe votarse previamente.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene razón el señor diputado; le ruego excuse a la Presidencia.

Sr. Perette. — Comprendo perfectamente, señor presidente.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar primeramente la moción de orden formulada por el señor diputado por Entre Ríos, a fin de que el artículo propuesto por el señor diputado Prece pase a comisión.

— Resulta negativa de 94 votos; votan 104 señores diputados.

Sr. Perette. — Anunciamos, señor presidente, que los diputados de nuestro sector nos retiramos del recinto, pues no estamos dispuestos a avalar con nuestra presencia la sanción de este artículo...

— Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

— Se retiran del recinto varios señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — Corresponde proceder a la votación del artículo, debiendo previamente la comisión manifestar si acepta o no las modificaciones propuestas.

Sr. Vinciguerra. — Quisiera hacer una consulta, señor presidente: si se debe votar la proposición de un diputado que se ha ausentado del recinto.

Sr. Presidente (Decavi). — Oportunamente el señor diputado que está ausente del recinto ha presentado el agregado que propone, habiéndolo sostenido de viva voz. Corresponde, en consecuencia, votarlo.

Sr. Vinciguerra. — Los diputados no pueden retirarse del recinto sin previo consentimiento de la Cámara.

Sr. Presidente (Decavi). — La Presidencia desea saber si la comisión acepta las modificaciones al texto del artículo propuesto por el señor diputado Prece.

Sr. Prece. — La comisión mantiene el texto original que he presentado. No acepta ninguna modificación.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el nuevo texto propuesto como artículo 13 por el señor diputado Prece, y aceptado por la comisión.

— Resulta afirmativa de 94 votos; votan 104 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — Corresponde que la Cámara se pronuncie en cada caso sobre si se ocupa de las modificaciones o agregados propuestos.

Se va a votar si la Cámara se ocupa de la modificación propuesta por el señor diputado Rodríguez Araya.

— Resulta negativa de 95 votos; votan 107 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar si la Cámara se ocupa de la modificación propuesta por el señor diputado Heredia.

— Resulta negativa de 101 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar si la Cámara se ocupa de la modificación propuesta por el señor diputado Goldstraj.

— Resulta negativa de 100 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — El artículo 14 es de forma.

Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Se va a votar la inserción solicitada por el señor diputado Perette.

— Resulta negativa de 90 votos; votan 100 señores diputados.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 7209.

Sr. Gómez Machado.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Decavi).— Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez Machado.— Hago moción de orden de que se levante la sesión y formulo indicación de que para la sesión de hoy se llame a la hora 18, en lugar de la hora 10, como se había resuelto.

Además, propongo que se cite a sesión el lunes y el martes próximos, a la hora 17.

Sr. Presidente (Decavi).— Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Santa Fe.

—Resulta afirmativa de 80 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi).— Queda levantada la sesión.

—Es la hora 5 y 10 del día 10 de enero.